

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 202/01	Tipo de cambio del euro	1
2003/C 202/02	Procedimiento de información — Reglas técnicas ⁽¹⁾	2
2003/C 202/03	Ayudas estatales — Alemania — Ayuda C 54/03 (ex N 194/02) — Medida compensatoria acompañada de la introducción de un gravamen basado en el kilometraje a los vehículos pesados de transportes de mercancías por el uso de autopistas — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ⁽¹⁾	5
2003/C 202/04	Ayudas estatales — Francia — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre el régimen de ayudas C 50/03 (ex NN 163/02) — Indemnizaciones a consecuencia de una paralización temporal de la pesca de la langosta roja en Córcega ⁽¹⁾	15
2003/C 202/05	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ⁽¹⁾	22
2003/C 202/06	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.3199 — Bank One Corporation/Quintiles) ⁽¹⁾	23
2003/C 202/07	Notificación previa de una operación de concentración [asunto COMP/M.3232 — Trelleborg/Smiths (PSS Division)] ⁽¹⁾	24
2003/C 202/08	Notificación previa de una operación de concentración (asunto COMP/M.3200 — Toshiba/Mitsubishi Electric/IV) — Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ⁽¹⁾	25
2003/C 202/09	Comunicación de la Comisión de conformidad con la Directiva 73/23/CEE del Consejo, del 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, en su versión modificada por la Directiva 93/68/CEE ⁽¹⁾	26

Número de información

Sumario (*continuación*)

Página

Banco Central Europeo

2003/C 202/10

Dictamen del Banco Central Europeo de 15 de agosto de 2003 solicitado por el Consejo de la Unión Europea, sobre una propuesta de decisión del Consejo relativa al análisis y la cooperación en relación con las monedas de euro falsificadas [COM(2003) 426 final] (CON/2003/16) 31

II *Actos jurídicos preparatorios*

.

III *Informaciones*

Comisión

2003/C 202/11

Adenda a la convocatoria 2003-2004 en el marco de la segunda fase del programa Leonardo da Vinci (EAC/15/02) 33

Tribunal de Cuentas

2003/C 202/12

Lista de aptitud — Oposición general CC/A/12/02 Constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (carrera A 7/A 6) en el ámbito de la informática 37

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

26 de agosto de 2003

(2003/C 202/01)

1 euro =

Moneda			Moneda		
		Tipo de cambio			Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,0816	LVL	lats letón	0,6271
JPY	yen japonés	127,06	MTL	lira maltesa	0,4244
DKK	corona danesa	7,4311	PLN	zloty polaco	4,358
GBP	libra esterlina	0,6918	ROL	leu rumano	36 650
SEK	corona sueca	9,278	SIT	tólar esloveno	234,96
CHF	franco suizo	1,537	SKK	corona eslovaca	41,93
ISK	corona islandesa	88,89	TRL	lira turca	1 506 000
NOK	corona noruega	8,323	AUD	dólar australiano	1,6809
BGN	lev búlgaro	1,9462	CAD	dólar canadiense	1,5163
CYP	libra chipriota	0,58466	HKD	dólar de Hong Kong	8,4355
CZK	corona checa	32,35	NZD	dólar neozelandés	1,8829
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	1,8982
HUF	forint húngaro	256,55	KRW	won de Corea del Sur	1 265,31
LTL	litas lituana	3,4524	ZAR	rand sudafricano	8,102

⁽¹⁾ Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

Procedimiento de información — Reglas técnicas

(2003/C 202/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Directiva 98/34/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).

Notificaciones de proyectos nacionales de reglas técnicas recibidas por la Comisión:

Referencia ⁽¹⁾	Título	Plazo del <i>statu quo</i> de tres meses ⁽²⁾
2003/280/I	Decreto referente a las disposiciones relativas a la fecha de caducidad de la leche fresca pasteurizada, de la leche fresca pasteurizada de alta calidad y de la leche microfiltrada fresca pasteurizada	⁽³⁾
2003/281/I	Decreto referente a las disposiciones relativas a la trazabilidad del origen de la leche cruda	⁽³⁾
2003/289/NL	Modificación I de la Ordenanza PDV relativa al reglamento de reconocimiento de las BPF en el sector de la alimentación para animales de 2003	7.11.2003
2003/290/NL	Decreto que contiene reglas relativas a la transformación de escombros de construcción y demolición con una trituradora de cascotes móvil (decreto relativo a la trituración móvil de escombros de construcción y demolición)	10.11.2003
2003/291/UK	Reglamento sobre vehículos de motor (construcción y utilización) (modificación nº) (Irlanda del Norte) de 2003	10.11.2003
2003/292/DK	Proyecto de reglamento relativo a los alimentos utilizados en acuicultura biológica	10.11.2003
2003/293/DK	Reglamento sobre acuicultura biológica	10.11.2003
2003/294/DK	Reglamento de alta corriente, párrafo 107-2-D1 Tomas de corriente para usos domésticos y análogos. Sección 2 — Disposiciones particulares para sistemas daneses, cuarta edición	20.10.2003
2003/295/IRL	Proyecto de edición de 2003 del Documento de Orientación Técnica C (Preparación del Emplazamiento y Resistencia a la Humedad) en la Parte C del Segundo Anexo a las Ordenanzas Nacionales de Edificación de 1997	12.11.2003

⁽¹⁾ Año, número de registro, Estado miembro autor.

⁽²⁾ Plazo durante el cual no podrá adoptarse el proyecto.

⁽³⁾ No hay período de *statu quo* por haber aceptado la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor.

⁽⁴⁾ No hay período de *statu quo* por tratarse de especificaciones técnicas u otros requisitos o reglas sobre los servicios vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión del párrafo segundo del punto 11 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Finalizado el procedimiento de información.

La Comisión desea llamar la atención sobre la sentencia «CIA Security», dictada el 30 de abril de 1996 en el asunto C-194/94 (Rec. 1996, p. I-2201), en virtud de la cual el Tribunal de Justicia considera que los artículos 8 y 9 de la Directiva 98/34/CE (entonces 83/189/CEE) deben interpretarse en el sentido de que los particulares pueden ampararse en ellos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, a los que incumbe negarse a aplicar un reglamento técnico nacional que no haya sido notificado con arreglo a la Directiva.

Esta sentencia confirma la Comunicación de la Comisión de 1 de octubre de 1986 (DO C 245 de 1.10.1986, p. 4).

Así, el desconocimiento de la obligación de notificación supone la inaplicabilidad de las reglas técnicas correspondientes, no pudiendo oponerse a los particulares.

Para más información sobre el procedimiento de notificación, dirigirse a:

Commission européenne
DG Entreprises, Unité F1

B-1049 Bruxelles

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Véase también el sitio: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Por lo tanto, el incumplimiento de la obligación de notificar un reglamento técnico implica la inaplicabilidad de dicho reglamento y no será oponible a los particulares.

LISTA DE ORGANISMOS NACIONALES RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 98/34/CE**BÉLGICA**

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III, 4ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
Sitio web: <http://www.mineco.fgov.be>
Sra. P. Descamps
Tel. (32-2) 206 46 89
Fax (32-2) 206 57 46
E-mail: belnotif@mineco.fgov.be

DINAMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø
Sitio web: <http://www.ebst.dk>
Sra. Laila Østergren
Tel. (45) 35 46 66 89 (directo)
Fax (45) 35 46 62 03
E-mail: Sra. Laila Østergren: loe@ebst.dk
Sra. Birgitte Spühler Hansen: bsh@ebst.dkdk
Dirección común para mensajes de notificación: noti@ebst.dk

ALEMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat XA2
Scharnhorststraße 34-37
D-10115 Berlin
Sitio web: <http://www.bmwa.bund.de>
Sra. Christina Jäckel
Tel. (49) 30 20 14 63 53
Fax (49) 30 20 14 53 79
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tel. (30-210) 778 17 31
Fax (30-210) 779 88 90
ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 Athens
Sr. E. Melagrakis
Tel. (30-210) 212 03 00
Fax (30-210) 228 62 19
E-mail: 83189in@elot.gr

ESPAÑA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y
Comunicaciones y de Medio Ambiente
Padilla, 46, Planta 2ª, Despacho: 6276

E-28006 Madrid
Doña Esther Pérez Peláez
Tel. (34) 913 79 84 64
Fax (34) 913 79 84 01
E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Sra. Suzanne Piau
Tel. (33) 153 44 97 04
Fax (33) 153 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Sra. Françoise Ouvrard
Tel. (33) 153 44 97 05
Fax (33) 153 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Sr. Tony Losty
Tel. (353-1) 807 38 80
Fax (353-1) 807 38 38
E-mail: lostyt@nsai.ie

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
I-00187 Roma
Sitio web: <http://www.minindustria.it>
Sr. V. Correggia
Tel. (39) 06 47 05 22 05
Fax (39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it
Sr. E. Castiglioni
Tel. (39) 06 47 05 26 69
Fax (39) 06 47 88 77 48
E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

LUXEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Sr. J. P. Hoffmann
Tel. (352) 469 74 61
Fax (352) 22 25 24
E-mail: see.direction@eg.etat.lu

PAÍSES BAJOS

Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Sr. Ebel Van der Heide
Tel. (31-50) 523 21 34

Sra. Hennie Boekema
Tel. (31-50) 523 21 35

Sra. Tineke Elzer
Tel. (31-50) 523 21 33

Fax (31-50) 523 21 59

E-mail general: Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Sitio web: <http://www.bmwa.gv.at>

Sra. Brigitte Wikgolm
Tel. (43-1) 711 00 58 96
Fax (43-1) 715 96 51 o (43-1) 712 06 80
E-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

PORTUGAL

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gãio, 2
P-2829-513 Caparica

Sitio web: <http://www.ipq.pt>

Sra. Miranda Ondina
Tel. (351) 21 294 82 36 o 81 00
Fax (351) 21 294 82 23
E-mail: MOndina@mail.ipq.pt
E-mail general: dir83189@mail.ipq.pt

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Dirección para el público: Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki

y
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Dirección postal:
PO Box 32
FIN-00023 Valtioneuvosto
Sitio web: <http://www.ktm.fi>

Sra. Heli Malinen
Tel. (358-9) 16 06 36 27
Fax (358-9) 16 06 46 22
E-mail: heli.malinen@ktm.fi

Sr. Katri Amper
E-mail general: maaraykset.tekniset@ktm.fi

SUECIA

Kommerskollegium
Box 6803
Drottningatan 89
S-113 86 Stockholm
Sitio web: <http://www.kommers.se>
Sra. Kerstin Carlsson
Tel. (48-8) 690 48 82 o (48-8) 690 48 00
Fax (48-8) 690 48 40 o (48-8) 30 67 59
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
E-mail general: 9834@kommers.se

REINO UNIDO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom

Sitio web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

Sr. Philip Plumb
Tel. (44) 207 215 15 64 o 14 88
Fax (44) 207 215 15 29
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
E-mail general: 98-34@dti.gov.uk

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
Rue de Trèves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles
Sitio web: <http://www.eftasurv.int>

Sr. Gunnar Thor Petursson
Tel. (32-2) 286 18 71
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

EFTA (AELC)
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue de Trèves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles

Sitio web: <http://www.efta.int>

Sra. Kathleen Byrne
Tel. (32-2) 286 17 34
Fax (32-2) 286 17 42
E-mail: DRAFTTECHREGGEFTA@efta.int
kathleen.byrne@efta.int

TURQUÍA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvarı — Emek — Ankara

Sitio web: <http://www.dtm.gov.tr>

Sr. Saadettin Doğan
Tel. (90-312) 212 88 00 o 20 44
(90-312) 212 88 00 o 25 65
Fax (90-312) 212 87 68
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

AYUDAS ESTATALES — ALEMANIA

Ayuda C 54/03 (ex N 194/02) — Medida compensatoria acompañada de la introducción de un gravamen basado en el kilometraje a los vehículos pesados de transportes de mercancías por el uso de autopistas**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE**

(2003/C 202/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante carta de 23 de julio de 2003 reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Federal de Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Energía y Transportes
Dirección A — Unidad 4
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 296 41 04

Dichas observaciones serán comunicadas a la República Federal de Alemania. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Procedimiento

Por carta de 6 de marzo de 2002, Alemania informó a la Comisión de su intención de introducir un sistema de reembolso de peajes acompañado de la introducción de un gravamen basado en el kilometraje a los vehículos pesados de transportes de mercancías por el uso de autopistas. Las últimas informaciones recibidas el 10 de junio de 2003, confirmaban la intención de sustituir el sistema de cobro de peajes adoptado por las autoridades alemanas, que había de entrar en vigor el 31 de agosto de 2003, por un sistema de peajes con tasas superiores y un régimen de reembolso.

Descripción de la medida prevista

El objetivo de la medida de ayuda notificada es compensar en parte los efectos de un posible incremento de las cargas económicas a que deberían hacer frente los transportistas por carretera, aplicando una medida compensatoria con un presupuesto máximo de 600 millones de euros anuales. Una vez autorizada la medida compensatoria por la Comisión y aplicada por las autoridades alemanas, la tasa media de peaje de 12,4 céntimos/km. será aumentada por el gobierno al importe medio de 15 céntimos/km ⁽¹⁾.

Sistema de reembolso de peajes

Alemania confirmó nuevamente a la Comisión que mantiene su intención de introducir el régimen de compensación inicial

consistente en un reembolso único del peaje mediante prueba de pago del impuesto especial sobre los combustibles dentro de Alemania. Los beneficiarios del reembolso serían todos los transportistas que utilizan las autopistas alemanas con vehículos de menos de 12 toneladas, cualquiera que sea su nacionalidad.

Evaluación de la ayuda

La Comisión estima que, en la fase actual, no puede descartarse que la medida compensatoria sea constitutiva de ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y que, por tanto, debería prohibirse a no ser que se la considere compatible con el mercado común en virtud de alguna de las excepciones previstas en el Tratado o en el Derecho derivado.

Con el fin de satisfacer las necesidades de coordinación del transporte según lo previsto en el artículo 73 del Tratado CE y los requisitos para su aplicación conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento 1107/70, la ayuda ha de ser necesaria y proporcional, no discriminatoria y no ha de distorsionar la competencia de forma contraria al interés común.

La Comisión puede estar de acuerdo en que, por razones políticas internas, llegue a precisarse una compensación parcial de posibles cargas financieras futuras ocasionadas por el aumento de las tasas de peaje. Puede también defenderse la postura de que es más justa la recuperación total y el reembolso de los costes que aplicar una tasa de peaje inferior. Ahora bien, las autoridades alemanas no han aportado argumento alguno para que haya que duplicar ahora la compensación respecto a la

⁽¹⁾ El 23 de mayo de 2003, el gobierno alemán decidió introducir una tasa de peaje inferior a la inicialmente prevista, reduciendo el nivel medio 2,6 céntimos (de 15,0 céntimos/km. a 12,4 céntimos/km.).

cantidad inicial de 300 millones de euros hasta alcanzar la cifra de 600 millones de euros. Ante la posibilidad de que se cree una situación considerablemente gravosa desde el punto de vista administrativo, la Comisión expresa dudas respecto a la sustitución de un peaje inferior por otro superior, unido a un lastre administrativo relativamente elevado.

Por el contrario, a juicio de la Comisión, el reembolso por peaje previsto no es contrario al principio de proporcionalidad.

La Comisión alberga asimismo serias dudas en cuanto a que el régimen de reembolso respete el principio de no discriminación. La relación entre una reducción de los peajes, por una parte, y el pago de impuestos específicos, por otra, no parece efectivamente tener justificación alguna. Bien al contrario, parece evidente que el régimen de reembolso por peajes tiene el efecto de discriminar a aquellos transportistas que llenen el depósito de combustible fuera de Alemania, es decir, principalmente los establecidos en otros Estados miembros. Por consiguiente, la medida redundaría en una discriminación *de facto* a la hora de atribuir la reducción del peaje.

La compatibilidad de una medida de ayuda pública con lo dispuesto en el Tratado y en el Derecho derivado comunitario es, por lo general, una de las condiciones para evaluar positivamente una medida de ayuda notificada. Por ello, la Comisión ha de cerciorarse de que el sistema de peaje es conforme a la Directiva 1999/62/CE («Euroviñeta») de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras ⁽²⁾. Uno de los temas que preocupan a la Comisión se refiere a la introducción práctica del sistema de peaje. Los dispositivos instalados a bordo de los vehículos para facilitar la forma de pago pueden no satisfacer suficientemente a todos los usuarios de las autopistas alemanas ya desde el 31 de agosto de 2003. Las formas alternativas de pago previstas para usuarios ocasionales pueden no tener capacidad suficiente para sustituir a esos dispositivos en el periodo inicial. En particular, ello puede favorecer a los usuarios alemanes frente a los extranjeros, los cuales no sólo encontrarán más dificultades para instalar los dispositivos a bordo, sino que se verán ante mayores problemas prácticos para utilizar correctamente el sistema manual de peaje en las casetas. Por lo anterior, la Comisión no puede concluir que el sistema de peaje propuesto cumpla todas las condiciones de la Directiva 1999/62/CE, y, en consecuencia, duda de que la ayuda notificada se adecue plenamente a la legislación comunitaria correspondiente. Igualmente, la ausencia de un sistema apropiado para el cobro de los peajes podría dar lugar a una perturbación de la libre circulación de mercancías contraria al artículo 28 del Tratado CE.

La Comisión no cuenta en la actualidad con ningún texto legislativo sobre la introducción de sistemas de reembolso de peajes. Esta falta de información alimenta aún mayores dudas acerca de la compatibilidad de la aplicación de la medida prevista.

La Comisión está asimismo en duda sobre la posible interpretación de la reducción indirecta de los impuestos especiales como categoría de reducciones contemplada en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE ⁽³⁾ que prevé un procedimiento particular de autorización.

⁽²⁾ DO L 187 de 20.7.1999, p. 42.

⁽³⁾ Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos (DO L 316 de 31.10.1992, p. 12).

En conclusión, la Comisión no está convencida del sistema previsto para el reembolso de peajes, y en particular de:

- su necesidad en interés de la Comunidad;
- su grado de cumplimiento de la Directiva 1999/62/CE y del artículo 28 del Tratado CE;
- si su evaluación se basa en textos legislativos pertinentes.

CARTA

«Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von der Bundesregierung übermittelten Angaben zu der obengenannten Beihilfe beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

I. VERFAHREN

1. Mit Schreiben vom 6. März 2002, das bei der Kommission (GD TREN) am 12. März 2002 (A/54606) einging, sowie mit Schreiben vom 7. März 2002, registriert am 7. März 2002 (A-54445), teilte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen der Bundesrepublik Deutschland der Kommission mit, dass die Bundesregierung beabsichtige, begleitend zur Erhebung streckenbezogener Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen durch schwere Nutzfahrzeuge ein Mauterstattungssystem einzuführen.
2. Mit Schreiben vom 21. März 2002 (D(02)1080) bestätigte das Generalsekretariat der Kommission den Eingang des Schreibens der Bundesrepublik und notifizierte das Gesetzesvorhaben unter der Nummer N 194/02.
3. Am 27. März 2002 (D/4933) wurde die Bundesregierung aufgefordert, der Kommission einige zusätzliche Informationen zur Klärung des Sachverhalts zu übermitteln. Die Bundesregierung beantwortete die Fragen der Kommission mit Schreiben vom 30. April 2002, registriert am 2. Mai 2002 (A/57969) und mit Schreiben vom 15. Mai 2002, registriert am 23. Mai 2002 (A/59124).
4. Am 3. Juni 2002 fanden in Brüssel bilaterale Kontakte zwischen Vertretern der Bundesrepublik Deutschland und der Kommission statt. In ihrem Schreiben vom 6. Juni 2002 (D/9146) teilte die Kommission der Bundesregierung mit, dass ihr für eine abschließende beihilfenrechtliche Prüfung der Entwurf der Rechtsverordnung vorliegen müsse.
5. Am 20. Dezember 2002, registriert am 23. Dezember 2002 (A/72966) übermittelte die Bundesregierung der Kommission den Entwurf einer Verordnung zur Festsetzung der Höhe der Autobahnmaut für schwere Nutzfahrzeuge und des Mauterstattungssystems. Weitere Informationen wurden der Kommission mit Schreiben vom 10. Januar 2003, registriert am 10. Januar 2003 (A-(03)10650) übermittelt.
6. Am 28. Februar 2003 fand in Brüssel ein weiteres bilaterales Treffen zwischen Vertretern der Bundesregierung und den Kommissionsdienststellen statt. Am 4. März 2003 (A(03)72933) teilte die Kommission der Bundesregierung die neue Frist für das Verfahren mit.

7. Am 6. März 2003, registriert am 10. März 2003 (A(03)14931) übermittelte die Bundesregierung der Kommission den neuen Entwurf einer Verordnung zur Festsetzung der Höhe der Autobahnmaut und teilte den Kommissionsdienststellen mit, dass die Regierung den Absatz betreffend das Mauterstattungssystem gestrichen habe.
8. Am 10. März 2003 und 9. April 2003 fanden in Brüssel zwei weitere bilaterale Treffen zwischen Vertretern der Bundesrepublik Deutschland und den Kommissionsdienststellen statt.
9. Am 15. Mai 2003 (D(03)7591) ersuchte die Kommission die Bundesregierung um weitere Informationen zur Rechtsgrundlage der Beihilferegelung. Die Kommission forderte die Bundesregierung auf, entweder zu bestätigen, dass der der Kommission am 6. März 2003 übermittelte Entwurf der Rechtsverordnung rechtsgültig ist und die Bundesregierung daher auf das notifizierte Mauterstattungssystem verzichtet oder der Kommission einen neuen Entwurf der Rechtsverordnung auf der Grundlage von Artikel 1 § 3 Absatz 3 des Gesetzes zu übermitteln. Da die Bundesregierung nicht innerhalb der gesetzten Frist antwortete, sandte die Kommission ihr am 27. Mai 2003 ein Mahnschreiben.
10. Am 10. Juni 2003, registriert am 19. Juni 2003 (A(03)23297) beantwortete die Bundesregierung das Schreiben der Kommission vom 15. Mai 2003 und unterrichtete die Kommission über die am 22. Mai 2003 vom Bundestag und am 23. Mai vom Bundesrat gefassten Beschlüsse.
11. Außerdem beantwortete der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Herr Manfred Stolpe, am 17. Juni 2003, registriert am 26. Juni 2003 (A(03)23824) das Schreiben der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Frau Loyola de Palacio, vom 26. Mai 2003, und ging dabei auch auf die bilaterale Sitzung vom 23. April 2003 in Brüssel ein.
12. Am 14. Juli 2003, registriert am 17. Juli 2003 (A(03)25658), forderte die Bundesregierung nur das Mautermäßigungsverfahren beihilfenrechtlich zu prüfen.

II. ALLGEMEINER HINTERGRUND ZUR BEIHILFEMASSNAHME

1. Einführung streckenbezogener Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen

13. Die geplanten Beihilfemaßnahme muss im Rahmen der Einführung einer streckenbezogenen Gebühr für die Benutzung der Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (nachstehend „Mautgebühr“ gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Buchstabe b) der Richtlinie 1999/62/EG⁽⁴⁾) gesehen werden, die ab 31. August 2003 das bisher geltende zeitbezogene System (nachstehend „Benutzungsgebühr“ gemäß Artikel 2 Buchstabe c) dieser Richtlinie) ersetzt.

⁽⁴⁾ Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge (ABl. L 187 vom 20.7.1999, S. 42).

14. Die derzeit geltende Benutzungsgebühr wird seit 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Autobahnbenutzungsgebührengesetzes (ABBG) vom 30. August 1994 erhoben. Sie ist zu entrichten für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen, die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind und deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens 12 t beträgt. Nach Ansicht der Bundesregierung handelte es sich jedoch bei der Benutzungsgebühr nur um den ersten Schritt hin zu einer verursachergerechten Anlastung der Wegekosten⁽⁵⁾. Da die tatsächlich zurückgelegten Strecken nicht berücksichtigt werden, ist die Benutzungsgebühr ihrer Ansicht nach nur ein relativ grobes Mittel zur Anlastung der Wegekosten. Außerdem wies die Bundesregierung darauf hin, dass sie nach EU-Recht an betragsmäßig festgelegte, relativ niedrige Gebührensätze gebunden ist, die nur mit Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten angehoben werden können. Die Vorteile des Mautsystems liegen demgegenüber nach Ansicht der Bundesregierung in

- der verursachergerechteren Anlastung von Wegekosten durch direkte Abhängigkeit der Maut von tatsächlich erbrachten Fahrleistungen;
- der Schaffung von Anreizen zur wirtschaftlicheren Ausnutzung der Transportkapazitäten und
- der Möglichkeit einer flexibleren Tarifgestaltung, wodurch die Verwirklichung weiterer verkehrs- und umweltpolitische Ziele unterstützt werden kann.

15. Daher haben Bundestag und Bundesrat am 22. März 2002 das Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (nachstehend „das Gesetz“)⁽⁶⁾ verabschiedet, das ein neues elektronisches Mautsystem und insbesondere die Erhebung einer Mautgebühr für die Benutzung der Autobahn durch die gleiche Fahrzeugkategorie wie bei der Benutzungsgebühr vorsieht.

16. Die Berechnung der neuen Mautgebühr basiert auf einem von der Bundesregierung speziell in Auftrag gegebenen Gutachten, das am 14. Februar 2002 veröffentlicht wurde⁽⁷⁾; In dem Gutachten werden die Kosten den einzelnen Fahrzeugkategorien zugeordnet unter Berücksichtigung der Anzahl der Fahrzeugkilometer und des durch die einzelnen Kategorien verursachten Verschleißes der Infrastrukturen. Das Prognos-Gutachten gelangt unter anderem zu dem Schluss, dass rund 45 % der gesamten Wegekosten für die Bundesautobahnen dem Schwerverkehr anzulasten sind. Das entspricht für das Jahr 2003 rund 3,4 Milliarden EUR⁽⁸⁾. Unter Berücksichtigung einer prognostizierten Fahrleistung von 22,7 Mrd. km schwerer Nutzfahrzeuge

⁽⁵⁾ Die deutsche Regierungskoalition hatte bereits am 20. Oktober 1998 beschlossen, die Benutzungsgebühr durch ein Mautsystem zu ersetzen.

⁽⁶⁾ Siehe Kapitel III, Rechtsgrundlage.

⁽⁷⁾ Wegekostenrechnung für das Bundesfernstraßennetz unter Berücksichtigung der Vorbereitung einer streckenbezogenen Autobahnbenutzungsgebühr, Prognos AG Basel, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung Universität Karlsruhe (TH), Basel/Karlsruhe, 14. Februar 2002.

⁽⁸⁾ Der Prognos-Gutachten zufolge wird der Betrag auf 3,62 Milliarden EUR im Jahr 2005 und auf 4,13 Milliarden EUR im Jahr 2010 ansteigen.

ab 12 t zulässigem Gesamtgewicht auf Bundesautobahnen lässt sich hieraus ein durchschnittlicher Mautsatz von 15 Cent pro Kilometer errechnen ⁽⁹⁾.

17. Aufgrund des Ergebnisses dieses Gutachtens hat die Bundesregierung ursprünglich eine durchschnittliche Mauthöhe zwischen 10 Cent/km und 17 Cent/km vorgeschlagen, je nach Achszahl des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination und der Emissionsklasse ⁽¹⁰⁾.
18. Am 23. Mai 2003 hat die Bundesregierung jedoch die Einführung einer niedrigeren Mautgebühr beschlossen und daher den durchschnittlichen Mautsatz um 2,6 Cent von 15,0 Cent/km auf 12,4 Cent/km gesenkt. Die Mautgebühr liegt nun zwischen 9 Cent/km und 13 Cent/km für jede Emissionsklasse von Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen mit höchstens 3 Achsen sowie zwischen 10 Cent/km und 14 Cent/km für jede Emissionsklasse von Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen mit 4 und mehr Achsen.
19. Am gleichen Tag hat die Bundesregierung ferner beschlossen, § 11 des Gesetzes, der sich auf die Verwendung der Mautgebühren bezieht, zu ändern. Die Sätze 2 und 3 besagen nun, dass das Mautaufkommen für die Ausgaben für Betrieb, Überwachung und Kontrolle des Mautsystems verwendet wird. Das verbleibende Mautaufkommen wird dann in vollem Umfang für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, überwiegend für den Bundesfernstraßenbau (Bundesautobahnen und Bundesstraßennetz), verwendet ⁽¹¹⁾.
20. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung des elektronischen Mautsystems sieht das Gesetz vor, dass die Infrastrukturbenutzer die Maut an das Bundesamt für den Güterverkehr zu entrichten haben. Es sieht jedoch die Möglichkeit vor, Errichtung und Betrieb des Mauterhebungssystems einem privaten Betreiber zu übertragen. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung eine Ausschreibung für das Mauterhebungssystem durchgeführt. Das neu geschaffene „Toll Collect“-Konsortium erhielt dabei den Zuschlag. An dem Konsortium sind die deutschen Unternehmen DaimlerChrysler Services AG und Deutsche Telekom AG zu je 45 % und das französische Unternehmen Cofiroute („Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes“) mit einem Geschäftsanteil von 10 % beteiligt. Die Schaffung des Gemeinschaftsunternehmens wurde von der Kommission am 30. April 2003 mit Auflagen genehmigt. In der Entscheidung ⁽¹²⁾ wird jedoch auch erklärt, dass die Genehmigung durch die Kommission nicht dem Ergebnis einer

weiteren Beihilfeentscheidung der Kommission über die Ausgleichsmaßnahme vorgreift.

21. Die Mauterhebung erfolgt über ein System, das ohne Eingriff in den Verkehrsfluss auf den Autobahnen auskommt, d. h. es wird keine Mautstationen geben. Es ist ein duales System: die Nutzer können die Maut über ein automatisches System entrichten, wofür die Fahrzeuge mit einem entsprechenden Gerät ausgerüstet sein müssen. Nach Angaben der Bundesregierung wird dieses elektronische Zahlungssystem der Anforderung in Bezug auf einen angemessenen Grad an Interoperabilität gerecht. Das von Toll Collect zu errichtende System sieht vor, dass die Lastkraftwagen mit Fahrzeuggeräten (On-Board-Units, OBN) ausgerüstet werden, die über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System) und einen GSM-Mobilfunksender verfügen. Anhand der dadurch erfassten Daten, d. h. des ermittelten Standorts und der gewählten Strecke des jeweiligen Lkw wird die zu zahlende Mautgebühr errechnet und dann dem Eigentümer des Fahrzeugs in Rechnung gestellt. Nach Angaben der Bundesregierung werden die 250 000 zum 31. August 2003 bzw. die 500 000 zum 31. Dezember 2003 zur Verfügung stehenden Fahrzeuggeräte (OBU) den von Experten geschätzten Bedarf decken. Wie die Bundesregierung der Kommission ferner mitgeteilt hat, wird eine ausreichende Zahl von Servicestationen für den Einbau der Fahrzeuggeräte (OBU) eingerichtet.
22. Wie im Gesetz vorgesehen, muss der Nutzer jedoch auch in der Lage sein, die Maut über ein manuelles Zahlungssystem zu entrichten, wofür die Betreiber ein Netz von Mautstellen an den Zufahrtsstraßen zu Autobahnen errichten müssen. Benutzer, die nicht die deutsche Sprache beherrschen, können die Benutzerinformation für die Mautstellen in einer anderen Sprache, z. B. Englisch, Französisch und Polnisch, erhalten. Zusätzlich zum Terminalsystem haben Nutzer auch die Möglichkeit, die Maut über das Internet zu zahlen.

2. Geschätzte Auswirkungen auf den Haushalt

23. Durch die Maut soll die bisher überwiegende Haushaltsfinanzierung der Verkehrsinfrastrukturen durch eine verstärkte Nutzerfinanzierung ersetzt werden. Bei einer unterstellten Autobahngebühr von durchschnittlich 15 Cent/km pro km werden jährliche Einnahmen in Höhe von 3,4 Mrd. EUR erwartet, die dem Bund zustehen. Mit der Absicht der Bundesregierung, die verursachten Wegekosten in vollem Umfang dem Transportgewerbe anzulasten, hätte sich die Belastung gegenüber dem derzeit geltenden System, das dem deutschen Haushalt im Jahr 2001 ca. 460 Mio. EUR ⁽¹³⁾ einbrachte, um das mehr als das Siebenfache erhöht.
24. Aufgrund des erheblichen Widerstandes von Seiten des Straßengüterverkehrsgewerbes und um die ebenfalls erforderliche Zustimmung des Bundesrates zu erhalten, schlug die Bundesregierung einen Ausgleich in Höhe von 300 Mio. EUR vor; von der entrichteten Maut werden hierfür bei Nachweis der Entrichtung von 4,29 Cent Mineralölsteuer 1,3 Cent/km erstattet ⁽¹⁴⁾.

⁽⁹⁾ Dieser durchschnittliche Satz läge über dem im Weißbuch der Kommission „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ (Europäische Kommission 2001, Tabelle 3, S. 72) angegebenen Betrag in Höhe von 13 Cent pro Kilometer.

⁽¹⁰⁾ Entwurf einer Rechtsverordnung vom 20. Dezember 2002, registriert am 23. Dezember 2002 (A/72966).

⁽¹¹⁾ Die Regierung hat ein Fünfjahres-Anti-Stau-Programm (2003–2007) aufgelegt, in dessen Rahmen Mittel für die Bundesautobahnen und das Bundesstraßennetz sowie die Schienenwege und Wasserstraßen verwendet werden, um die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig zu verbessern. Rund 51 % (1 060 Mio. EUR) werden in das Straßennetz fließen und 49 % in andere Verkehrsträger (782 Mio. EUR für die Schiene und 251 Mio. EUR für Binnenwasserstraßen); Presseerklärung, BGL, 3. Juli 2003.

⁽¹²⁾ COMP/M.2903 Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/JV.

⁽¹³⁾ Die Bruttoeinnahmen aus der Eurovignette für das Jahr 2002 belaufen sich auf rund 500 Mio. EUR.

⁽¹⁴⁾ Siehe Kapitel III, 2.1 Höhe der Beihilfe.

25. Der endgültige politische Kompromiss ⁽¹⁵⁾ führte jedoch zu einer Ermäßigung der Maut um insgesamt 2,6 Cent/km ⁽¹⁶⁾ von 15 Cent/km auf 12,4 Cent/km, wodurch die Mautentnahmen des Bundeshaushalts sinken.
26. In einem zweiten Schritt, dem der Bundesrat bereits zugestimmt hat, beabsichtigt die Bundesregierung, die von Straßengüterverkehrsunternehmen, die schwere Nutzfahrzeuge auf den Bundesautobahnen einsetzen, zu entrichtende Maut auf einen Betrag anzuheben, durch den die Kosten für ihren Bau, Ausbau und Betrieb in vollem Umfang gedeckt werden. Um dies zu erreichen, muss die Erhöhung den ursprünglich auf 3,4 Mrd. EUR geschätzten Einnahmen entsprechen. Als Gegenstück zur möglichen Anhebung der Mautsätze sieht der politische Kompromiss Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 600 Mio. EUR vor.
27. Am 10. Juni 2003, informierte die Bundesregierung die Kommission jedoch darüber, dass der gesamte Betrag in Höhe von 600 Mio. EUR für die Mautermäßigung zur Verfügung steht. Die Kommission untersucht deshalb eine solche Kompensationsmaßnahme innerhalb eines Szenarios erhöhter Mautsätze geprüft ⁽¹⁷⁾.

III. EINGEHENDE BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN BEIHILFEMAßNAHME

1. Ziel der geplanten Beihilfemaßnahme

28. Ziel der notifizierten Beihilfemaßnahme ist es, die Auswirkungen der möglicherweise höheren Belastung der Straßengüterverkehrsunternehmer teilweise zu kompensieren durch ein Mauterstattungssystem, eine Senkung der jährlichen Kfz-Steuer oder ein Investitionsprogramm für die Anschaffung neuer Lkw. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt 600 Mio. EUR pro Jahr veranschlagt.
29. Sobald die Ausgleichsmaßnahme von der Kommission genehmigt und von der Bundesregierung umgesetzt sind, wird die Regierung den durchschnittlichen Mautsatz von 12,4 Cent/km auf durchschnittlich 15 Cent/km anheben. Nach Ansicht der Bundesregierung wird der Betrag in Höhe von 15 Cent/km dann die Kosten für Bau, Ausbau und Betrieb der betreffenden Infrastrukturen in vollem Umfang decken.

⁽¹⁵⁾ Ergebnis der Beschlüsse vom 22. und 23. Mai 2003 waren eine Änderung des Gesetzes, eine neue Rechtsverordnung zur Festsetzung der Höhe der Autobahnmaut und eine gemeinsame Erklärung von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung.

⁽¹⁶⁾ Die Ermäßigung der Mautgebühr von 15 Cent/km um 2,6 Cent/km auf 12,4 Cent/km ist genau doppelt so hoch wie die ursprünglich vorgesehene Mauterstattung in Höhe von 1,3 Cent/km. Der Ausgleich in Höhe von 600 Mio. EUR beträgt ebenfalls das Doppelte des ursprünglichen Betrags in Höhe von 300 Mio. EUR.

⁽¹⁷⁾ Die Kommission erhielt eine große Anzahl von Briefen, die Kritik an der Maßnahme üben, so von Europäischen Organisationen wie z. B. IRU (International Road Transport Union), UECC (l'Union européenne des Chambres de Commerce et d'Industrie) oder FEDEMAC (Federation of European Movers Associations); von nationalen Vereinigungen wie FEBETRA und SAV in Belgien, FETEIA in Spanien, FIT in Italien, DTL in Dänemark, TLN und KNV in den Niederlanden, SA (Swedish Road Haulage Association), „La Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France“, NLF in Norwegen, SKAL (Suomen Kuorma-Autoliitto r.y.) in Finnland oder der Wirtschaftskammer aus Österreich; sowie von einigen europäischen Abgeordneten unterschiedlicher Nationalität und parteipolitischer Herkunft.

2. Form der geplanten Beihilfemaßnahme

2.1. Mauterstattungssystem

30. Am 10. Juni 2003 hat Deutschland gegenüber der Kommission bekräftigt, dass die Einführung des ursprünglich notifizierten Ausgleichssystems, bei dem die Erstattung eines bestimmten Betrags des Mautsatzes auf der Grundlage der in Deutschland entrichteten Mineralölsteuer erfolgt, weiterhin geplant ist. Auch im Beschluss des Bundesrates vom 23. Mai 2003 ⁽¹⁸⁾ wird die Bedeutung eines Mauterstattungssystems hervorgehoben und gefordert, dieser Maßnahme im Hinblick auf die Harmonisierung auf europäischer Ebene Vorrang einzuräumen. In der Zwischenzeit informierte die Bundesregierung die Kommission, dass das Mauterstattungssystem sobald wie möglich, spätestens aber am 1. Januar 2004 eingeführt werden soll. Daher legt die Kommission bei der Erläuterung der Ausgleichsmaßnahmen den Schwerpunkt vollständig auf das Mauterstattungssystem. Ihrer Beschreibung liegen das am 22. März 2002 verabschiedete Gesetz, der Entwurf der Rechtsverordnung vom 18. Dezember 2002 und zusätzliche von der Bundesregierung seit der ersten Notifizierung am 6. März 2003 offiziell bereitgestellte Informationen zugrunde.

Rechtsgrundlage

31. Das Mauterstattungssystem — wie auch die Höhe der Maut — basiert auf Artikel 1 des Gesetzes über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen, das von der Regierung am 22. März 2002 verabschiedet wurde.
32. Das Gesetz wurde am 5. April 2002 unterzeichnet, am 11. April 2002 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und am 23. Mai 2003 geändert ⁽¹⁹⁾.
33. Gemäß § 3 Absatz 2 ist die Bundesregierung ermächtigt, die Höhe der Maut pro Kilometer unter sachgerechter Berücksichtigung der Anzahl der Achsen und der Emissionsklasse der Fahrzeuge durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates festzusetzen. Gemäß § 3 Absatz 3 ist die Bundesregierung ermächtigt, in einer auf Artikel 1, § 3 Absatz 2 basierenden Rechtsverordnung die Höhe der Maut pro Kilometer auch unter sachgerechter Berücksichtigung von geleisteten sonstigen verkehrsspezifischen Abgaben der Mautschuldner im Geltungsbereich des Gesetzes festzusetzen (nachstehend „die Erstattungsklausel“).
34. Am 18. Dezember 2002 hat die Bundesregierung auf der Grundlage von Artikel 1, § 3 Absatz 2 des Gesetzes eine „Verordnung zur Festsetzung der Höhe der Autobahnmaut für schwere Nutzfahrzeuge“, die auch ein Mauterstattungssystem umfasst, vorgeschlagen und am 20. Dezember 2002 der Kommission übermittelt.
35. Der Nachweis über in Deutschland gezahlte Mineralölsteuern ist gemäß der derzeit geltenden Fassung des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Dezember 1992 ⁽²⁰⁾ erbringen.

⁽¹⁸⁾ Bundesrat Drucksache 142/2/03, 23.5.2003.

⁽¹⁹⁾ BGBl. G 5702, 2002, Teil I Nr. 23, veröffentlicht in Bonn am 11. April 2002, S. 1234.

⁽²⁰⁾ BGBl. I S.2150, 2185; 1993, S. 169.

Beihilfeempfänger

36. Begünstigte der Mauterstattung sind unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit alle Straßengüterverkehrsunternehmer, die die Bundesautobahnen mit Fahrzeugen von mindestens 12 t benutzen. Die Benutzer erhalten die Mauterstattung jedoch nur, wenn sie die Zahlung der Mineralölsteuer in Deutschland durch Vorlage entsprechender Dokumente nachweisen können.

Betrag der Beihilfe

37. Bei dem notifizierten Betrag der Mauterstattung handelt es sich um eine einmalige Mauterstattung von höchstens 1,3 Cent/km bei Nachweis der Entrichtung von 4,29 Cent Mineralölsteuer in Deutschland gemäß § 2 des Entwurfs der Rechtsverordnung vom 18. Dezember 2002.
38. Die Mauterstattung in Höhe von 1,3 Cent/km ist Ergebnis folgender Berechnung, die auf der zuvor getroffenen politischen Entscheidung für einen Ausgleich in Höhe von 300 Mio. EUR beruht: ausgehend von einer Fahrleistung von insgesamt 22,6 Mrd. km pro Jahr (LKW von mindestens 12 t) ergibt eine Mautgebühr von 1 Cent/km Maut-einnahmen von 226 Mio. EUR pro Jahr. Geht man von einem Verbrauch von 30 Litern/100 km und einer Mineralölsteuer von 0,01 EUR aus, so ergibt ein 1 Cent Mineralölsteuer ein Steueraufkommen in Höhe von rund 68 Mio. EUR pro Jahr. Daraus ergibt sich, dass 1 Cent Mautgebühr rund 3,3 Cent gezahlter Mineralölsteuer gegenübersteht, um das gleiche Aufkommen zu erhalten ⁽²¹⁾. Die politische Entscheidung zur Erstattung von 300 Mio. EUR würde daher zur Erstattung von rund 1,3 Cent/km führen ⁽²²⁾. Die Entrichtung dieser Mineralölsteuer in Höhe von 4,29 Cent ⁽²³⁾ ist durch die Vorlage geeigneter Dokumente nachzuweisen.
39. Nach dem ursprünglich notifizierten System für eine Mauterstattung in Höhe von 300 Mio. EUR hätte die Erstattung insgesamt rund 9 % der neuen streckenbezogenen Mautgebühr in Höhe von etwa 3,4 Mrd. EUR entsprochen.
40. Die Bundesregierung teilte der Kommission jedoch mit, dass der Gesamtbetrag der Mauterstattung sich auf 600 Mio. EUR belaufen wird. Ein Ausgleich in Höhe von 600 Mio. EUR entspräche hypothetisch einer Ermäßigung von rund 17,6 % der Mauteinnahmen.

Laufzeit

41. Der Vorschlag für ein Mauterstattungssystem ist unbefristet. Die Bundesregierung vertritt jedoch den Standpunkt, dass eine Anpassung des Mauterstattungssystems, beispielsweise eine zeitliche Befristung, durch eine Änderung der Rechtsverordnung leicht möglich sein wird, ohne dass eine Gesetzesänderung, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfte, erforderlich wäre. Die Bundesregierung informierte die Kommission über die Möglichkeit einer zeitlichen Begrenzung der Maßnahme.

⁽²¹⁾ $226:68 = 3,3$.

⁽²²⁾ $300:226 = 1,3274$.

⁽²³⁾ $1,3 \times 3,3 = 4,29$ (Cents).

Durchführung der geplanten Maßnahme

42. Eines der Kernelemente des Mauterstattungssystems ist der Nachweis der Entrichtung der Mineralölsteuer in Deutschland. Gemäß § 2 Absatz 2 des Verordnungsvorschlags vom 18. Dezember 2002 kann dieser Zahlungsnachweis durch Vorlage geeigneter Unterlagen wie Tankquittungen oder Abrechnungsbelege von Tankkartengesellschaften aus Deutschland, jeweils unter Angabe des amtlichen Kennzeichens des betankten mautpflichtigen Fahrzeugs, erbracht werden. § 2 Absatz 3 der Verordnung sieht vor, dass die Maut ermäßigt wird, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass Mautgebühren und Mineralölsteuern im gleichen Kalenderjahr entrichtet wurden. Außerdem besagt § 2 Absatz 3, dass in der Regel die Summe der innerhalb eines Kalenderjahres angefallenen Mautermäßigung (Mautguthaben) auf die Mautschuld angerechnet wird, die für das mautpflichtige Fahrzeug im Folgejahr entsteht. Den Antrag auf Mauterstattung hat der Mautschuldner für ein bestimmtes Fahrzeug spätestens bis zum 31. März an das Bundesamt für Güterverkehr zu richten, das mit der Durchführung des Gesetzes beauftragt wurde und zugleich als Kontroll- und Ordnungswidrigkeitenbehörde fungiert. Kann das Mautguthaben im Folgejahr jedoch nicht auf eine Mautschuld angerechnet werden, wird es auf Verlangen ausbezahlt.

2.2. Weitere Ausgleichsmaßnahmen

43. Am 10. Juni 2003 hat die Bundesregierung gegenüber der Kommission nicht nur die Einführung des Mauterstattungssystems bekräftigt, sondern die Kommission über zwei weitere mögliche Maßnahmen informiert, die ebenfalls in dem politischen Kompromiss genannt wurden: die Senkung der jährlichen Kfz-Steuer und ein Investitionsprogramm für die Anschaffung von Lastkraftwagen.
44. Die erste Maßnahme betraf die Ausarbeitung eines neuen Legislativvorschlags zur Senkung der jährlichen Kfz-Steuer für schwere Nutzfahrzeuge auf die gemäß der Richtlinie 1999/62/EG zulässige Mindesthöhe.
45. Die zweite Maßnahme betraf ein Investitionsprogramm für die Anschaffung schadstoffärmerer schwerer Nutzfahrzeuge der noch nicht rechtsverbindlichen Emissionsklassen S 4 und S 5.
46. Am 14. Juli 2003 forderte die Bundesregierung von der Kommission jedoch lediglich das Mauterstattungssystem beihilfenrechtlich zu prüfen.

IV. WÜRDIGUNG DER BEIHILFE1. Vorliegen einer Beihilfe

47. Nach Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag „sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“

48. Die Kommission prüft deshalb in diesem Zusammenhang, ob die nach Paragraph 2 der Rechtsverordnung zur Höhe der Mautgebühr für schwere Nutzfahrzeuge vom 18. Dezember 2002 vorgesehene Mauterstattung als Beihilfe gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag anzusehen ist.

49. Die Kommission stellt zunächst fest, dass es sich bei der Mauterstattung, die beim Bundesamt für Güterverkehr — einer staatlichen Behörde — beantragt werden kann, um staatliche Mitteln handelt.

50. Die Kommission stellt ferner fest, dass es Absicht der Bundesregierung ist, den Transportunternehmen über die geplante Mauterstattung einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Die Maßnahme ist zudem selektiv, da die Maßnahme lediglich Transportunternehmen begünstigt, die Mineralölsteuern in Deutschland gezahlt haben.

51. Die Maßnahme für sich allein betrachtet verschafft einzelnen Transportunternehmen einen selektiven Vorteil gegenüber Konkurrenten. Außerdem ist die Erstattung innerhalb der Gruppe potenziell Begünstigter an bestimmte Bedingungen geknüpft (den Kauf von Kraftstoff oder den Erstattungsantrag). Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen droht.

52. Nach der Rechtsprechung des EuGH setzt der Begriff der Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels zudem voraus, dass das/die begünstigte(n) Unternehmen in der Lage ist/sind, durch innergemeinschaftlichen Wettbewerb die Handelsströme zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinflussen⁽²⁴⁾. Angesichts der vollständigen Liberalisierung des Zugangs zum Straßengüterverkehrsmarkt⁽²⁵⁾ ist anzunehmen, dass öffentliche Finanzhilfen, die der Straße gegebenenfalls Vorteile gegenüber anderen Verkehrsträgern verschaffen, den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

53. Daher kann jede staatliche Beihilfe für den gewerblichen Straßengüterverkehr den Wettbewerb verfälschen oder drohen zu verfälschen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

54. Aufgrund dieser Überlegungen kann nach Auffassung der Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass das notifizierte Mauterstattungs-system eine Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt.

55. Daher ist die geplanten Maßnahme grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie können aufgrund einer der im Vertrag oder sonstiger im Sekundärrecht vorgesehenen Ausnahmen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

⁽²⁴⁾ Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17. September 1980, C 730/79, Philip Morris, Slg. 1980, S. 2671.

⁽²⁵⁾ Verordnung (EWG) Nr. 3118/93 des Rates (ABl. L 279 vom 12.11.1993).

2. Vereinbarkeit der geplanten Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt

2.1. Einhaltung der Wettbewerbsregeln

56. Zunächst sei daran erinnert, dass für den Fall, dass aufgrund der Vorprüfung eines Beihilfeverfahrens die Kommission die Überzeugung gewinnt, dass dieses Vorhaben nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, oder aber zu der Schlussfolgerung gelangt, dass nicht alle Schwierigkeiten hinsichtlich der Beurteilung der Vereinbarkeit dieses Vorhabens mit dem Gemeinsamen Markt ausgeräumt werden können, die Kommission in Übereinstimmung mit geltender Rechtsprechung verpflichtet ist, alle erforderlichen Stellungnahmen einzuholen und zu diesem Zweck das Verfahren des Artikels 88 Absatz 2 des EG Vertrags einzuleiten⁽²⁶⁾.

57. Die Kommission muss ferner bewerten, ob das Mauterstattungs-system mit den Beihilferegeln vereinbar ist. Laut Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) und c) EG-Vertrag und Artikel 61 Absatz 3 Buchstaben a) und c) EWR-Abkommen können bestimmte Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden, um die wirtschaftliche Entwicklung in bestimmten Regionen bzw. die Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige zu fördern. Die geplante Mautermäßigung fällt jedoch allem Anschein nach nicht unter diese Bestimmungen. Ebenso wenig sind die Bestimmungen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag und Art. 61 EWR-Abkommen anwendbar, da die Maßnahme nicht der Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamen europäischem Interesse oder der Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschafts-leben dient.

58. Gemäß Artikel 73 EG-Vertrag sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entsprechen, mit dem Vertrag vereinbar. Die Kommission vertritt den Standpunkt, dass das Konzept einer Beihilfe, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entspricht, sich auf die Notwendigkeit des Tätigwerdens der Regierung bezieht, die auftritt, wenn kein Wettbewerbsmarkt besteht oder wenn der Markt versagt⁽²⁷⁾.

59. Die Kommission ruft dabei in Erinnerung, dass bei der Preisgestaltung im Verkehrssektor externe Effekte entstehen, die durch die einzelnen Verkehrsträger auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, wenn die jeweiligen Verkehrsträger die realen Kosten selbst nicht übernehmen. Dies kann zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Verkehrsträgern und zu Marktversagen führen.

⁽²⁶⁾ Siehe Urteil des Gerichts erster Instanz vom 18. September 1995, Rechtssache T-49/93, Sammlung der Rechtsprechung 1995 Seite II-02501.

⁽²⁷⁾ Siehe Entscheidung der Kommission vom 20. Juni 2001, N 219/2001 — Österreich, Absatz 33; Siehe auch Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2002, N 287/2002 — Dänemark; Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 1999, N 21/98 — Italien, ABl. C 227 vom 28. August 1999, S. 12; Entscheidung der Kommission vom 21. April 1999, N 588/98 — Dänemark, ABl. C 166 vom 12. Juni 1999, S. 6; Entscheidung der Kommission vom 22. Oktober 1997, N 79/97 Niederlande, ABl. C 377 vom 12. Dezember 1997, S. 3.

60. Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates⁽²⁸⁾ werden Artikel 73 EG-Vertrag umgesetzt und spezielle Ausnahmen für Beihilfen festgelegt, die den Erfordernissen der Koordinierung des Binnenverkehrs entsprechen. In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten bis zum Inkrafttreten einer gemeinsamen Regelung für die Anlastung der Wegekosten Beihilfen an Unternehmen gewähren können, die im Gegensatz zu anderen Unternehmen mit Ausgaben für die von ihnen benutzten Verkehrswege belastet sind.
61. Entsprechend der Praxis der Kommission bei der Behandlung von Fällen staatlicher Beihilfen, müssen allerdings drei Anforderungen erfüllt sein, damit die Beihilfe den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs im Sinne von Artikel 73 EG-Vertrag⁽²⁹⁾ und den Erfordernissen für dessen Umsetzung gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates entsprechen:
1. Die Beihilfe ist im Rahmen des Gesamtvorhabens im gemeinschaftlichen Interesse erforderlich und steht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang.
 2. Die Beihilfe wird auf nichtdiskriminierender Grundlage gewährt.
 3. Die Beihilfe führt zu keiner Wettbewerbsverzerrung, die aufgrund ihres Umfangs dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft.

1. Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit

62. Mit dem neuen Gesetz verfolgt die Bundesregierung das Ziel einer verursachergerechteren Anlastung der Wegekosten. Damit ist aber zugleich eine politisch gewollte Mehrbelastung des Straßengüterverkehrsgewerbes verbunden, denn insgesamt müssen die Benutzer der Infrastruktur statt bislang 460 Mio. EUR zukünftig rund 2,8 Mrd. EUR bezahlen.
63. Die Bundesregierung, die eine Anhebung der Mautsätze auf einen Betrag beabsichtigt, durch den die Infrastrukturkosten in vollem Umfang gedeckt werden, ist bereit, einen bestimmten Mautbetrag mit Hilfe eines Mauterstattungssystems zu erstatten. Die Kommission könnte sich der Auffassung anschließen, dass aus innenpolitischen Gründen ein teilweiser Ausgleich für die durch die Anhebung der Mautsätze entstehende künftige Belastung erforderlich sein wird. Auch könnte etwas dafür sprechen, dass vollständige Kostendeckung und teilweise Erstattung gerechter sind als

die geltende niedrigere Mautgebühr. Deutschland hat jedoch keine Angaben zu den Auswirkungen der Maßnahme auf einen sogenannten „Kraftstoff-Tourismus“, vor allem in die Nachbarländer, gemacht. Außerdem hat die Bundesregierung keine Gründe dafür genannt, warum der Ausgleich nun von ursprünglich 300 Mio. EUR auf den neu notifizierten Betrag von 600 Mio. EUR angehoben werden soll.

64. Die Kommission ist der Auffassung, dass die geplante Mauterstattung nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt, da auch ein Ausgleich in Höhe von 600 Mio. EUR nur zu einer Ermäßigung von höchstens 20 % führt.

2. Diskriminierungsfreiheit

65. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das Mauterstattungssystem vorsieht, die Mautermäßigung nur gegen Vorlage von in Deutschland erhaltenen Tankquittungen und Abrechnungsbelegen anzurechnen. Dies entspricht durchaus dem in der Richtlinie 1999/62/EG in Erwägungsgrund 20 genannten Territorialprinzip. Es gibt somit keine formale Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, da die Möglichkeit der Anrechnung von allen Verkehrsteilnehmern in Anspruch genommen werden kann.

66. Darüber hinaus versichert die Bundesregierung mit Schreiben vom 10. Januar 2003, dass das beschriebene Erstattungsverfahren gleichermaßen für inländische wie auch ausländische Mautschuldner gilt und eine Mauterstattung auch dann möglich ist, wenn nur eine mautpflichtige Fahrt durchgeführt wurde. Die Bundesregierung versichert ferner, dass an den manuellen Zahlstellen Hinweise hinsichtlich der Möglichkeit der Mauterstattung in mehreren Sprachen bereit gehalten werden.

67. Dennoch scheint es für die Verbindung von Mautermäßigung auf der einen Seite und Entrichtung von Steuern auf der anderen Seite keine Rechtfertigung zu geben. Das Mauterstattungssystem führt im Gegenteil zu einer Diskriminierung derjenigen Straßengüterverkehrsunternehmer, die außerhalb Deutschlands tanken, d. h. vor allem der Unternehmer aus anderen Mitgliedstaaten. Daher würde die Maßnahme de facto zu einer Ungleichbehandlung bei der Gewährung der Mautermäßigung führen. Daher hat die Kommission ernste Zweifel daran, ob die Beihilfemaßnahme mit dem Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit in Einklang steht, der ein wichtiges Element bei der Entscheidung darüber ist, ob die Beihilfe mit Artikel 73 EG-Vertrag und Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vereinbar ist⁽³⁰⁾.

3. Gemeinsames Interesse

68. Die Kommission betont, dass bei der Bewertung der Mauterstattung die Auswirkungen des neuen Mautsystems insgesamt zu berücksichtigen sind, denn auch bei Gewährung eines Ausgleichs in Höhe von 600 Mio. EUR erhöht sich die Belastung für die Straßengüterverkehrsunternehmer stark.

⁽²⁸⁾ Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vom 4. Juni 1970 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr in der geänderten Fassung.

⁽²⁹⁾ Siehe Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2002, N 287/2002 — Dänemark; Entscheidung der Kommission vom 19. September 2001, N 500/2001 — Vereinigtes Königreich, Netzzuschüsse für lizenzierte Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber Entscheidung der Kommission vom 20. Juni 2001, N 219/2001 — Österreich; Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 1999, N 617/98 Niederlande (Utrecht), ABl. C 71 vom 11. März 2000, S. 7; Entscheidung der Kommission vom 8. Dezember 1999, N 412/98 Italien (Marken), ABl. C 55 vom 26. Februar 2000, S. 11; Entscheidung der Kommission vom 8. Juli 1999, N 121/99 — Österreich, ABl. C 245 vom 28. August 1999, S. 2; Entscheidung der Kommission vom 21. April 1999, N 588/98 — Dänemark, ABl. C 166 vom 12. Juni 1999, S. 6; Siehe auch KOM(2000) 5 endg. vom 26.7.2000, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gewährung von Beihilfen für die Koordinierung des Eisenbahnverkehrs, des Straßenverkehrs und der Binnenschifffahrt.

⁽³⁰⁾ Zur Frage, ob die Benutzungsgebühr nichtdiskriminierend ist, siehe 2.2, Vereinbarkeit mit der Richtlinie 1999/62/EG.

69. Die Einführung einer streckenbezogenen Benutzungsgebühr zur Deckung der Infrastrukturkosten ist eines der Kernelemente der gemeinsamen Verkehrspolitik: Zunächst einmal steht die vorgeschlagene Einführung der Maut in Einklang mit den Überlegungen, die die Kommission im Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik⁽³¹⁾ hinsichtlich einer kostengerechten Preisstruktur angestellt hat. Zweitens könnte der Ersatz der gegenwärtig für schwere Nutzfahrzeuge erhobenen Benutzungsgebühr durch ein Mautsystem zur einer gerechteren Beteiligung an den Infrastrukturkosten beitragen, da ein erheblicher Teil der Kosten für Bau, Unterhaltung und Betrieb der Autobahnen den schweren Nutzfahrzeugen zuzurechnen ist. Drittens wird die Maut einem der in Artikel 2 EG-Vertrag genannten Ziele der Gemeinschaft dienen, nämlich der Förderung „eines hohen Maßes an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität“. Betrachtet man schließlich die Maßnahme insgesamt, so scheint das Gleiche hinsichtlich der potenziellen Vorteile, die eine Verlagerung der Güterverkehrsströme von der Straße auf umweltfreundlichere Verkehrsträger mit sich bringt, zu gelten. Denn die Umstellung von einer zeitabhängigen auf eine entfernungsabhängige Autobahngebühr führt dazu, dass kurze Strecken billiger, lange Strecken dagegen teurer werden. Dies entspricht nicht nur dem Ziel einer gerechten Wegekostenanlastung, sondern wird auch dem Umstand gerecht, dass erst auf längere Strecken weniger umweltbelastende Verkehrsträger (Schiene und Wasserstraße) eine Alternative zur Straße bieten.

70. Darüber hinaus wird bei der geplanten Mauterstattung den Belangen des Umweltschutzes wie folgt Rechnung getragen: die Autobahnbenutzungsgebühr ist emissionsabhängig gestaltet, d. h. für stark emittierende Lkw sind höhere Gebühren zu zahlen als für emissionsarme Lkw. Der auf die Autobahngebühr höchstens anrechenbare Betrag von gezahlter Mineralölsteuer ist aber für alle Lkw gleich. Das heißt aber, dass emissionsarme Lkw durch die Anrechnung von gezahlter Mineralölsteuer prozentual erheblich mehr von Autobahngebühren entlastet werden als stark emittierende Lkw. Zudem führt die Maßnahme dazu, dass für einen Lkw mit hohem Kraftstoffverbrauch in der Regel ein geringerer Prozentsatz der in Deutschland gezahlten Mineralölsteuer auf die zu zahlende Autobahngebühr anrechnet werden kann als für einen Lkw mit niedrigem Kraftstoffverbrauch. Außerdem könnten durch das Mauterstattungssystem viele unnötige Fahrten mit dem Ziel, niedriger besteuerten Kraftstoff zu tanken, vermieden werden.

2.2. Vereinbarkeit mit der Richtlinie 1999/62/EG und Artikel 28 des EG-Vertrags

71. Die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit den Bestimmungen des EG-Vertrags und anderem EG-Sekundärrecht ist in der Regel eine Bedingung für eine positive Würdigung einer notifizierten Beihilfemaßnahme. Im vorliegenden Fall ist das Mauterstattungssystem unumstößlich mit der neuen Maut verbunden, weshalb die Kommission verpflichtet ist, ebenfalls die Übereinstimmung dieser Maut

mit anderen Bestimmungen des EG-Rechts zu bewerten. In Bezug auf das spezielle, der Kommission angemeldete Mauterstattungssystem muss die Kommission sicherstellen, dass die Rechtsgrundlage der Maut, insbesondere das am 22. März 2002 verabschiedete und am 23. Mai 2003 geänderte Gesetz und die am 23. Mai 2003 verabschiedete Rechtsverordnung mit der Richtlinie 1999/62/EG („Eurovignette“) vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge⁽³²⁾ vereinbar sind.

72. Das Gesetz berücksichtigt die Bestimmungen der Richtlinie 1999/62/EG. Es werden die in den Artikeln 1 und 2 festgelegten Begriffsbestimmungen verwendet. Zu spezifischen Bestimmungen der Richtlinie sind folgende Anmerkungen zu machen:

73. Zunächst muss die Kommission prüfen, ob die Gebühren gerechtfertigt sind unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die gewogenen durchschnittlichen Mautgebühren sich gemäß Artikel 7 Absatz 9 an den Kosten für den Bau, den Betrieb und den Ausbau des betreffenden Verkehrsnetzes orientieren müssen. Bei der Berechnung werden die Baukosten aus vorangegangenen Zeiträumen berücksichtigt und das „betreffende Verkehrsnetz“ wird als das gesamte Bundesautobahnnetz interpretiert. Dieser Ansatz ist im Hinblick auf die Ziele der Richtlinie zu bewerten.

74. Gemäß Artikel 7 Absatz 10 können die Mautsätze differenziert werden nach Fahrzeug-Emissionsklassen, sofern keine Mautgebühr mehr als 50 % über der Gebühr liegt, die für gleichwertige Fahrzeuge erhoben wird, die die strengsten Emissionsnormen erfüllen. Das deutsche System steht mit diesem Ziel in Einklang.

75. Die Kommission hat ferner Bedenken in bezug auf die praktische Einführung des Mautsystems. Es könnte sein, dass die für eine bequeme Zahlung erforderlichen Fahrzeuggeräte (OBU) zum 31. August 2003 nicht für alle Benutzer der Bundesautobahnen ausreichen. Die für gelegentliche Benutzer gedachten alternativen Zahlungsformen verfügen möglicherweise nicht über die erforderliche Kapazität, um in der Einführungsphase ersatzweise eingesetzt zu werden. Dies könnte vor allem deutschen Autobahnbenutzern einen Vorteil vor ausländischen Benutzern verschaffen, die nicht nur größere Schwierigkeiten beim rechtzeitigen Einbau der Fahrzeuggeräte (OBU), sondern auch mehr praktische Probleme mit der ordnungsgemäßen Benutzung des manuellen Mautstellensystems haben werden. Ferner, gibt es laut zahlreicher Briefe an die Kommission, eine mangelnde Verfügbarkeit der Fahrzeuggeräte (OBU), welche darüber hinaus den freien Güterverkehr beeinträchtigen könnte und dieser Aspekt muss daher ebenfalls geprüft werden. Für den Fall, dass ein Mangel eines angemessenen Mauteinhebungssystems besteht und sollte dieser Mangel zu Störungen des freien Warenverkehrs und damit zu einer Verletzung von Artikel 28 des EG Vertrags führen, behält sich die Kommission das Recht vor, ein gesondertes Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen.

⁽³¹⁾ „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“, Europäische Kommission 2001, Tabelle 3, S. 72.

⁽³²⁾ ABl. L 187 vom 20.7.1999, S. 42.

76. Außerdem wurde bereits darauf hingewiesen, dass es für die Verbindung von Mautermäßigung auf der einen Seite und Entrichtung von Steuern auf der anderen Seite keine Rechtfertigung zu geben scheint. Das Mauterstattungssystem führt im Gegenteil zu einer Diskriminierung derjenigen Straßengüterverkehrsunternehmer, die außerhalb Deutschlands tanken, d. h. vor allem der Unternehmer aus anderen Mitgliedstaaten. Daher würde die Maßnahme de facto zu einer Ungleichbehandlung bei der Gewährung der Mautermäßigung führen.

77. Die Kommission hat daher ernste Zweifel daran, ob die Maßnahme mit Artikel 7 Absätze 4 und 5 der Richtlinie 1999/62/EG vereinbar ist, nach denen Maut- und Benutzungsgebühren „weder mittelbar noch unmittelbar zu einer unterschiedlichen Behandlung ⁽³³⁾ aufgrund der Staatsangehörigkeit des Verkehrsunternehmers oder des Ausgangs- oder Zielpunktes des Fahrzeugs führen“ dürfen und Maut- und Benutzungsgebühren „so eingeführt und erhoben (werden) und ihre Zahlung so kontrolliert (wird), dass dies den Verkehrsfluss möglichst wenig beeinträchtigt“.

78. Daher kann die Kommission nicht den Schluss ziehen, dass die Maut alle Bestimmungen der Richtlinie 1999/62/EG erfüllt und, sie hat somit ernsthafte Zweifel daran, ob die mit dem Mauterstattungssystem unumstößlich verbundene Maut, vollständig mit dem einschlägigen EG-Recht vereinbar ist.

2.3. Rechtsgrundlage der notifizierten Maßnahme

79. Der Kommission liegen derzeit keine Rechtstexte zur Einführung des Mauterstattungssystems vor. Offensichtlich ist der Entwurf einer Rechtsverordnung vom 10. Dezember 2002 inzwischen überholt. In ihrer Antwort vom 10. Juni 2003 ist die Bundesregierung jedoch nicht auf das in den an Deutschland gerichteten Schreiben vom 15. bzw. 27. Mai 2003 enthaltene Ersuchen der Kommission um Übermittlung der relevanten Rechtsgrundlage eingegangen.

80. Durch diesen Mangel an Informationen werden die Zweifel der Kommission in Bezug auf die Umsetzung der geplanten Maßnahme verstärkt.

2.4. Zusätzliche verfahrenstechnische Aspekte

81. Wie die Kommission außerdem feststellt, könnte argumentiert werden, dass die vorgeschlagene Mauterstattung sich wie eine Verbrauchsteuerermäßigung auswirkt. Wäre dies der Fall, so müsste das Mauterstattungssystem auch im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 1992/81/EWG ⁽³⁴⁾ bewertet werden. Nach diesem Artikel sind Verbrauchsteuerermäßigungen grundsätzlich zulässig, doch muss der Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig einen Mitgliedstaat ermächtigen, weitere Steuerbefreiungen oder Ermäßigungen aus besonderen politischen Erwägungen einzuführen.

82. Daher hat die Kommission Zweifel daran, ob bei der notifizierten Maßnahme das angemessene Verfahren eingehalten wurde. Es muss geklärt werden, ob auch die Genehmigung der Mautermäßigung nach einem anderen förmlichen Verfahren, wie in Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 92/81/EWG festgelegt, erfolgen müsste.

V. ENTSCHEIDUNG

Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der geplanten Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie ersucht Ihre Behörden ferner, den möglichen Beihilfeempfängern unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Konkret:

1. Teilen Sie bitte die Begründung für den geplanten Ersatz des derzeitigen Mautsatzes durch ein System von höheren Sätzen in Kombination mit einer Erstattung mit. Zu nennen sind vor allem alle Gründe, die den im Vergleich zum bis 31. August 2003 geltenden System erheblich höheren Verwaltungsaufwand rechtfertigen.
2. Geben Sie bitte die einschlägige Rechtsgrundlage eines eventuellen Mauterstattungssystems an, d. h. einen neuen Entwurf der Rechtsverordnung auf der Grundlage von Artikel 1 § 3 Absatz 3 des Gesetzes.
3. Bitte begründen Sie, warum das Mautermäßigungssystem nicht nach dem förmlichen Verfahren gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 92/81/EWG notifiziert wurde.
4. Machen Sie auch Angaben zu den Umweltfolgen der Ausgleichsmaßnahme.
5. Machen Sie bitte alle erforderlichen Angaben im Hinblick darauf, dass das neue Mautsystem alle Bestimmungen der Richtlinie 1999/62/EG und die Bestimmungen von Artikel 28 EG Vertrag genau erfüllt.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.

Die Kommission weist die Bundesrepublik Deutschland darauf hin, dass sie alle betroffenen Dritten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung desselben im *Amtsblatt der Europäischen Union* unterrichten wird. Außerdem wird sie die Betroffenen in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum *Amtsblatt* und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens über den Vorgang unterrichten. Alle Betroffenen werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»

⁽³³⁾ Siehe auch Kapitel 2.1. Einhaltung der Wettbewerbsregeln: 2. Diskriminierungsfreiheit.

⁽³⁴⁾ Richtlinie 92/81/EWG des Rates vom 19. Dezember 1992 zur Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Mineralöle (ABl. L 316 vom 31.10.1992, S. 12).

AYUDAS ESTATALES — FRANCIA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre el régimen de ayudas C 50/03 (ex NN 163/02) — Indemnizaciones a consecuencia de una paralización temporal de la pesca de la langosta roja en Córcega

(2003/C 202/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 23 de julio 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a la siguiente dirección:

Comisión Europea
Dirección General de Agricultura
Dirección de Política Horizontal
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 295 19 42

Dichas observaciones se comunicarán a las autoridades francesas. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito que se mantenga confidencial su identidad, exponiendo los motivos de su solicitud.

RESUMEN

Mediante carta de fecha 6 de septiembre de 2002, Francia notificó a la Comisión el proyecto de decisión de la Colectividad Territorial de Córcega por el que se concedían indemnizaciones a los pescadores afectados por la paralización temporal de la pesca de la langosta roja durante los años 2002, 2003 y, en su caso, 2004.

La decisión de conceder la ayuda notificada, para el año 2002, fue tomada el 26 de septiembre de 2002 mediante la resolución de la Asamblea de Córcega 02/267 AC, y, a continuación aplicada en diciembre de 2002, antes de que la Comisión hubiese podido pronunciarse sobre su compatibilidad con el mercado común. Por tanto, esta ayuda se ha ejecutado infringiendo el apartado 3 del artículo 87 del Tratado y, en consecuencia, constituye una ayuda ilegal tal como se define en la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE ⁽¹⁾. Por ello, se registró como ayuda no notificada con el número NN 163/02. Para los años 2003 y, en su caso, 2004, la ayuda todavía no se ha ejecutado.

Todos los pescadores que practican la pesca de la langosta en Córcega tienen derecho a estas ayudas con arreglo al régimen indicado, es decir, unas 350 personas (200 patronos y 150 marineros). La flota pesquera de la langosta está compuesta en un 90 % por buques de menos de 12 metros de eslora.

El importe total de la indemnización concedida por la Colectividad Territorial de Córcega a los pescadores en virtud del régimen de ayudas notificado asciende a 997 946 euros en 2002, es decir 3 526 euros por arrastrero (12 en total) y 4 639 euros por cualquier otro buque (206 en total). Para el año 2003 se concedería una cantidad del mismo orden.

Las medidas notificadas son ayudas estatales y tienen que analizarse a la luz de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura ⁽²⁾ (en lo sucesivo denominadas «las directrices») y del Reglamento (CE) n° 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca ⁽³⁾.

La evaluación de la compatibilidad con el mercado común de un régimen de ayudas estatales destinado a compensar las pérdidas derivadas de una paralización temporal de las actividades pesqueras debe efectuarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 2.2.2 de las directrices.

El régimen de ayudas en cuestión no parece ajustarse a lo dispuesto en el párrafo primero del punto 2.2.2 de las directrices, que remite al artículo 16 del Reglamento (CE) n° 2792/1999.

⁽²⁾ DO C 19 de 20.1.2001, p. 7.

⁽³⁾ Reglamento (CE) n° 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 2369/2002 (DO L 358 de 31.12.2002, p. 49).

⁽¹⁾ DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

Para las ayudas concedidas en 2002, las normas aplicables establecen que una paralización temporal puede dar lugar a indemnización cuando sea consecuencia de un «plan de recuperación» de un Estado miembro o de un acontecimiento imprevisible. No parece que se cumpla ninguna de estas condiciones a juzgar por la información remitida por las autoridades francesas. Para las ayudas correspondientes al año 2003 (y, en su caso, el 2004), el artículo 16, en su versión modificada vigente a partir del 1 de enero de 2003, pone condiciones más estrictas (la paralización temporal debe estar causada por un acontecimiento imprevisible o bien por la aprobación por el Consejo de un plan de recuperación o de gestión o en caso de que la Comisión o uno o varios Estados miembros decidan medidas de urgencia), condiciones que no reúne el régimen analizado.

El párrafo segundo del punto 2.2.2 de las directrices, que remite al apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) n° 2792/1999, autoriza a los Estados miembros a conceder ayudas en caso de paralización temporal si se cumplen tres condiciones:

1. la paralización temporal debe inscribirse en el marco de un plan de protección de los recursos acuáticos,
2. el régimen tiene que limitarse a la introducción de medidas sociales complementarias que sean objeto de financiación nacional,
3. y los beneficiarios de las medidas debe ser personas que ejerzan su actividad profesional principal a bordo de un buque de pesca.

En vista de los compromisos asumidos por la autoridades francesas ante la Comisión destinados a reforzar las medidas iniciales que acompañan a la paralización temporal, parece que las actuaciones en virtud del régimen analizado puedan calificarse de «plan de protección de los recursos acuáticos». En cambio, el método de cálculo de las indemnizaciones concedidas, basadas en el volumen de negocios de los buques y no en función únicamente de los ingresos personales de los pescadores, así como su importe, impiden calificar las ayudas previstas en este régimen de «medidas sociales complementarias». Finalmente, las autoridades francesas no han aportado pruebas de que las ayudas previstas por este régimen se limitarían a las personas que ejerzan su actividad profesional principal a bordo de un buque de pesca y estén afectadas por la medida de paralización temporal.

Así pues, en esta fase del examen, parece que el régimen notificado no se ajusta plenamente a las condiciones establecidas por la directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca.

Con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999, la Comisión podrá reclamar a cualquier beneficiario la devolución de la ayuda ilegalmente percibida.

CARTA

«La Comisión a l'honneur d'informer le Gouvernement français qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, para-

graphe 2, du Traité CE et par le règlement (CE) du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (4).

1. Procédure

La France a notifié à la Commission, par courrier du 6 septembre 2002, le projet d'une décision de la Collectivité territoriale de Corse visant à accorder des compensations financières aux pêcheurs affectés par l'institution d'un arrêt temporaire de la pêche à la langouste rouge pour les années 2002, 2003 et, éventuellement, 2004.

La Commission a transmis le 19 septembre 2002 cette notification au Comité Scientifique, Technique et Économique de la Pêche (CSTEP), défini à l'article 33 du règlement 2371/2002 (5), qui a fait parvenir son avis à la Commission le 10 novembre 2002.

Par courrier en date du 18 novembre 2002 et courrier électronique en date du 14 janvier 2003, la Commission a demandé aux autorités françaises des renseignements complémentaires, qui lui sont parvenus par courriers des 11 décembre 2002, 9 janvier et 3 février 2003.

La décision d'accorder l'aide notifiée, pour l'année 2002, a été prise le 26 septembre 2002, par le biais de la délibération de l'Assemblée de Corse 02/267 AC, puis mise en œuvre en décembre 2002, avant que la Commission ait pu se prononcer sur sa compatibilité avec le marché commun. Cette aide a donc été mise à exécution en violation de l'article 87 (3) du Traité et constitue à ce titre une aide illégale au sens de l'article 1 (f) du règlement 659/1999. Elle a ainsi été enregistrée comme aide non notifiée, sous le numéro NN 163/02.

Pour les années 2003 et (éventuellement) 2004, l'aide n'a pas encore été mise en œuvre.

2. Description

L'objet du régime d'aides notifié est d'accorder une compensation aux pêcheurs qui subissent une perte de revenus consécutive à la mise en place d'une interdiction de pêcher la langouste rouge en Corse lors des mois de septembre 2002 et 2003, instituée par un arrêté du Préfet de Corse du 29 août 2002. Cette mesure pourra être étendue au mois de septembre 2004 par le biais d'une nouvelle décision.

2.1. D'après les données transmises à la Commission par les autorités françaises, la pêche à la langouste rouge en Corse se caractérise par un volume de captures peu élevé, mais constitue un secteur économique de forte valeur ajoutée. Alors que le volume moyen des captures de langoustes rouges effectuées par la flotte corse s'élève à environ 120 tonnes par an (soit 6 % des captures totales de la flotte de pêche en Corse), le chiffre d'affaires annuel de ce secteur est estimé à 5,5 millions EUR, soit environ un tiers du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur de la pêche en Corse. Cette importance économique tient à la valeur élevée de la langouste en Corse, dont le prix sur le marché est estimé à 45 EUR/kilogramme.

(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5) Règlement n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

Les effectifs concernés par la pêche à la langouste rouge s'élèvent à environ 350 personnes (200 patrons pêcheurs et 150 marins). La flotte de pêche corse est constituée à 90 % de navires de moins de 12 mètres.

La pêche à la langouste rouge est une activité saisonnière: jusqu'en 2002, elle n'était en effet autorisée que sept mois par an, du 1^{er} mars au 30 septembre de chaque année. L'interdiction de pratiquer ce type de pêche pendant 5 mois a été instituée en 1968, suivie par la création, en 1977, de cantonnements, dans lesquels la pêche aux crustacés est prohibée; la pêche sous-marine de la langouste rouge a également été interdite à partir de 2000. Ces dispositions spécifiques à la Corse complètent les règles fixées au niveau communautaire, relatives à la taille minimale des langoustes rouges pouvant être pêchées (24 cm) ainsi qu'à la taille des filets ⁽⁶⁾.

En dépit de ces mesures, des données concordantes fournies par les autorités françaises indiquent que le stock de langoustes rouges en Corse fait aujourd'hui l'objet d'une surexploitation. Les captures ont régulièrement diminué et sont estimées à 117 tonnes pour l'année 2001 (contre 300 tonnes au début du XX^e siècle et encore 280 tonnes au début des années 1980), en baisse régulière dans toutes les pêcheries de Corse durant ces trois dernières années. Même si les données sur ce point sont encore insuffisantes, il semble également que les langoustes capturées soient en moyenne de plus petite taille qu'auparavant.

2.2. Au vu de ces éléments indiquant une raréfaction des ressources, les autorités françaises ont mis en place de nouvelles mesures destinées à la conservation des langoustes, dont l'interdiction de la pêche à cette espèce durant les mois de septembre 2002, 2003 et, si nécessaire, 2004, constitue la principale mesure. Cette interdiction constitue l'arrêt temporaire des activités de pêche, dont l'indemnisation fait l'objet du régime analysé. L'interdiction s'applique à tous les navires de pêche enregistrés en Corse et dans les eaux territoriales de l'île.

L'interdiction de pratiquer la pêche à la langouste est donc étendue d'un mois par rapport aux années précédentes, et couvre la moitié de l'année. Le mois de septembre constitue celui durant lequel les captures de langoustes sont les plus élevées (20 % des captures annuelles environ). Les langoustes sont plus mobiles et ainsi vulnérables aux activités de pêche, en raison de la température élevée de l'eau et du fait qu'il s'agit de la période de reproduction. Par ailleurs, la demande est élevée, comme tout au long de la saison estivale. L'interdiction de la pêche pendant la période hivernale instituée en 1968, se limitant à la période allant du 1^{er} octobre au 28 février, avait au contraire un impact limité sur le niveau des ressources, compte tenu des conditions météorologiques défavorables aux sorties en mer et de la faible mobilité des langoustes pendant cette période de l'année.

Cette interdiction de pratiquer la pêche au cours du mois de septembre s'accompagne de mesures complémentaires. Un suivi scientifique est mené afin de collecter des données supplémentaires permettant d'avoir une information plus complète sur

l'état du stock de langoustes en Corse et sur l'impact des pêcheries concernées. Des projets sont également conduits afin de tester le recours à des techniques de pêche plus sélectives que celles actuellement pratiquées (filet trémail) ainsi que des possibilités de diversification durable des pêcheurs de langoustes vers d'autres types de pêche, notamment de poissons et crustacés autres que la langouste. La création d'habitats artificiels pour les langoustes est également envisagée. Il est en outre prévu de favoriser la coopération régionale avec les autorités sardes, afin de développer une approche commune de la gestion du stock de langoustes, partagé entre les deux régions. Une augmentation des moyens de contrôle du respect des obligations existantes, incluant les points de vente, devrait être mise en place.

Les autorités françaises ont transmis à la Commission les données scientifiques et économiques étayant la mise en place de l'ensemble de ces mesures nouvelles destinées à la conservation du stock de langoustes en Corse. Le régime analysé a été soumis pour avis au Comité Scientifique Technique et Économique de la Pêche (CSTEP).

Le CSTEP a fait savoir que le régime, tel qu'il a été notifié, ne peut être qualifié de «plan de rétablissement» et que des doutes existaient quant au fait qu'il puisse contribuer à des améliorations mesurables dans le domaine de la conservation. Il a également mis en évidence l'insuffisance de données scientifiques fiables, tout en admettant que de telles données n'étaient probablement pas disponibles actuellement. Dans le même temps, il a reconnu que les données existantes suggéraient que le stock de langoustes est sérieusement surexploité et qu'il pourrait être utile d'instaurer un plan de rétablissement visant les langoustes dans la région. Il a considéré en conclusion que le plan notifié devait s'appuyer sur des données scientifiques plus détaillées et que son contenu devait être renforcé, par le biais de l'institution de mesures complémentaires notamment.

L'avis du CSTEP a été transmis aux autorités françaises. Par courrier en date du 9 janvier 2003, celles-ci se sont engagées à renforcer les mesures mises en place en complément de l'arrêt temporaire d'activité, dans le sens des recommandations effectuées par le CSTEP. Ce renforcement doit se traduire en particulier par un enrichissement du suivi scientifique, concernant notamment les données relatives aux caractéristiques du stock de langoustes et l'impact des activités de pêche, ainsi que par une meilleure identification des effets de l'arrêt temporaire et des mesures complémentaires à adopter, et par des modalités de contrôle accrues. Par ailleurs, un rapport contenant des données relatives au suivi scientifique, ainsi qu'à l'application et aux effets de ce plan sur le rétablissement de la ressource sera transmis chaque année à la Commission.

2.3. Afin de dédommager les 350 pêcheurs pratiquant la pêche à la langouste en Corse, le régime notifié prévoit le versement d'une compensation financière au cours des années 2002, 2003 et, si la mesure d'arrêt temporaire est reconduite, 2004. Elle est calculée sur la base d'une évaluation des pertes de recettes subies par ces pêcheurs suite à la mise en place de l'interdiction de la pêche à la langouste en septembre. Le montant total de cette compensation, financée par la Collectivité territoriale de Corse, s'est élevée à 997 946 EUR en 2002. Le montant devrait être du même ordre pour l'année 2003.

⁽⁶⁾ Cf. articles 5 et 8 du règlement 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (JO L 171 du 6.7.1994, p. 1).

3. Appréciation

Les aides accordées par la Collectivité territoriale de Corse au titre de l'arrêt temporaire de la pêche à la langouste constituent des aides d'État au sens de l'article 87 du Traité CE. Ces mesures bénéficiant à des entreprises ou individus qui travaillent dans le secteur de la pêche, elles doivent être analysées à la lumière des Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 19 du 20.1.2001) — ci-après dénommées Lignes directrices — et des dispositions du règlement n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ⁽⁷⁾ (ci-après «règlement n° 2792/1999»).

Le régime couvre des aides qui ont été versées en 2002, ainsi que des aides dont il est prévu qu'elles soient versées en 2003 (et éventuellement 2004). D'autre part, le règlement n° 2792/1999, auquel se réfèrent les lignes directrices, a été modifié par le règlement 2369/2002 ⁽⁸⁾, avec effet au 1^{er} janvier 2003. Les règles applicables au régime d'aides analysé sont ainsi légèrement différentes selon que l'on analyse la compatibilité avec le marché commun des aides accordées pour l'année 2002 ou les aides prévues pour 2003 (et, éventuellement, 2004).

À ce stade de l'examen, il semble que le régime notifié ne se conforme pas pleinement aux conditions posées par les règles applicables aux aides d'État, aussi bien en ce qui concerne les aides versées en 2002 que celles prévues en 2003 et, éventuellement, 2004.

3.1. Aides versées au titre de l'année 2002

Le point 3.4 des lignes directrices prévoit qu'une aide illégale (c'est-à-dire ayant été versée par un État membre avant l'approbation de la Commission) doit être examinée par la Commission au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'aide a été accordée. En outre, dans sa communication 2002/C 119/12 ⁽⁹⁾, la Commission indique qu'elle appréciera la compatibilité des aides illégales avec le marché commun selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi.

L'acte administratif instituant les aides accordées pour compenser les pertes de revenus subies suite à l'arrêt temporaire d'activité en septembre 2002 est constitué par la délibération de l'Assemblée de Corse 02/267 AC, adoptée le 26 septembre 2002; en outre, selon les informations transmises par les autorités françaises, la mise en œuvre financière de ces aides est intervenue en décembre 2002. Il faut donc considérer que les règles applicables aux aides versées en 2002 sont celles

en place avant l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2003, du règlement 2369/2002, amendant le règlement n° 2792/1999.

L'évaluation de la compatibilité avec le marché commun d'un régime d'aides d'État destinées à compenser des pertes consécutives à un arrêt temporaire des activités de pêche peut s'opérer au regard de deux bases légales différentes: le point 2.2.2 des lignes directrices, premier paragraphe, ou le point 2.2.2 des lignes directrices, deuxième paragraphe.

3.1.1. Le régime notifié doit tout d'abord être analysé au regard des dispositions du premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices. Ces dispositions prévoient que les aides à l'arrêt temporaire d'activités de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le droit communautaire si elles sont destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une mesure d'arrêt temporaire d'activité motivée par les circonstances visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 (tel qu'il était applicable avant sa modification par le règlement 2369/2002, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2003).

3.1.1.1. En vertu de l'article 16 (1), a) du règlement n° 2792/1999 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le règlement 2369/2002), les États membres peuvent octroyer des indemnités aux pêcheurs et propriétaires de navires en cas «d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques». Les autorités françaises n'ont pas produit d'éléments pouvant démontrer que l'interdiction de la pêche à la langouste durant le mois de septembre 2002 résultait d'un événement non prévisible. Les données transmises par les autorités françaises ainsi que les mesures de conservation adoptées au cours de ces dernières années semblent au contraire indiquer que la nécessité de protéger le stock de langoustes en Corse ne constitue pas une préoccupation nouvelle.

3.1.1.2. En vertu de l'article 16 (1), c) du règlement n° 2792/99 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le règlement 2369/2002), les États membres peuvent octroyer des indemnités aux pêcheurs et propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités en cas de mise en place d'un «plan de rétablissement» d'une ressource menacée d'épuisement, décidé par la Commission ou par un ou plusieurs États membres. L'État membre qui met en place un tel «plan de rétablissement» est tenu de transmettre à la Commission les justifications scientifiques et économiques appropriées. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) prévu à l'article 16 du règlement 3760/92 ⁽¹⁰⁾ délivre un avis sur ces mesures.

Les autorités françaises ont transmis les données scientifiques et économiques justifiant la mise en place d'un plan de rétablissement de la langouste en Corse, ainsi que les actions prévues dans le cadre de ce plan. Le CSTEP a délivré un avis sur ce plan lors de sa session de novembre 2002. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l'arrêt temporaire contenu dans le régime notifié ne peut être qualifié de «plan de rétablissement» au sens de l'article 16 du règlement 2792/1999.

⁽⁷⁾ Règlement n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

⁽⁸⁾ Règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

⁽⁹⁾ Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).

⁽¹⁰⁾ Règlement 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389 du 31.12.1992).

Les plans de rétablissement (ou de reconstitution) constituent des instruments majeurs de la politique de conservation des ressources aquatiques, et leur contenu doit répondre à des paramètres précis qui en assurent l'efficacité.

Tenant compte de ces éléments et de l'avis du CSTEP à propos du plan décrit dans le régime analysé, la Commission considère que la qualification de «plan de rétablissement» requiert en effet la réunion de plusieurs éléments, parmi lesquels:

- l'existence d'un diagnostic concernant le stock ciblé, afin de déterminer si le volume de ce stock se situe en deçà des limites biologiques sûres, et les techniques de pêche pratiquées;
- la fixation d'objectifs de rétablissement;
- une évaluation, fondée sur des paramètres mesurables, de l'efficacité et de la proportionnalité des mesures proposées par rapport à ces objectifs; un calendrier relatif à la réalisation de ces objectifs;
- l'adoption de mesures complémentaires par rapport au seul arrêt des activités de pêche, notamment dans le domaine du contrôle et de la recherche scientifique;
- l'analyse des effets socio-économiques à court et long terme des mesures proposées.

La Commission estime que les mesures engagées par les autorités françaises dans le cadre de l'arrêt temporaire qu'elles ont notifié ne correspondent pas aux critères permettant de définir «un plan de rétablissement».

Les données scientifiques justifiant la mise en œuvre des mesures envisagées paraissent incomplètes et les effets de ces mesures sur le rétablissement des ressources ne sont pas assez clairement démontrées. En outre, la période d'application des mesures, limitées à 3 ans maximum, paraît trop réduite pour que l'on puisse les qualifier de «plans de rétablissement», qui requiert des actions sur le plus long terme. Enfin, dans le cas d'un stock partagé entre la Corse et la Sardaigne, le rétablissement de la ressource exige qu'une action concertée soit mise en œuvre avec les autorités sardes dès le commencement des actions prévues.

Les aides versées en 2002 au titre du régime notifié ne semblent donc pas se conformer aux dispositions posées par le premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices, qui se réfèrent à l'article 16 du règlement 2792/1999.

3.1.2. Le régime analysé doit également être analysé à la lumière du deuxième paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices.

Ce paragraphe dispose que les mesures sociales d'accompagnement à l'intention des pêcheurs, destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre d'un plan de protection des ressources aquatiques tel que prévu à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999, peuvent être considérées comme compatibles sous réserve de la notifi-

cation à la Commission du plan en cause qui doit définir des objectifs précis et mesurables et un échéancier limité dans le temps.

L'intérêt de ce plan du point de vue social ainsi que la justification de mesures spécifiques allant au-delà du régime de droit commun devront être apportés. Par «pêcheurs», on entend uniquement «les personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité». L'article 12 (6) du règlement 2792/1999, avant sa modification par l'article 1 (12) (d) du règlement 2369/2002, dispose que «les États membres peuvent introduire à l'intention des pêcheurs des mesures d'accompagnement bénéficiant d'un financement national et destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre des plans de protection des ressources aquatiques».

En vertu des dispositions des lignes directrices précitées, et de l'article 12 (6) du règlement 2792/1999, auxquelles elles se réfèrent, il résulte donc qu'un État membre est autorisé à accorder des aides en cas d'arrêt temporaire si trois conditions sont remplies: l'arrêt temporaire doit s'inscrire dans le cadre d'un «plan de protection des ressources aquatiques» (1), le régime doit se limiter à «l'introduction de mesures sociales d'accompagnement bénéficiant d'un financement national» (2), et les bénéficiaires de telles mesures doivent être des «personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité» (3).

3.1.2.1. La notion de «plan de protection des ressources» doit être interprétée comme se distinguant de celle de «plan de rétablissement»; les critères définis au point 3.1.1.2 sont uniquement relatifs aux «plans de rétablissement» et ne s'appliquent pas aux «plans de protection des ressources». Un plan de rétablissement n'a vocation à s'appliquer qu'aux stocks dont les scientifiques ont déterminé, au niveau européen, qu'ils étaient en deçà des limites biologiques sûres, alors que les plans de protection s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'une surexploitation mais ne sont pas nécessairement en deçà de ces limites biologiques. Le second paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices indique qu'un plan de protection des ressources «doit définir des objectifs précis et mesurables et un échéancier limité dans le temps». En outre, l'inscription de l'arrêt temporaire dans le cadre d'un plan de protection des ressources implique que la suspension de l'activité de pêche ne constitue pas la seule mesure adoptée, mais qu'elle soit accompagnée d'autres mesures effectives destinées à la protection des ressources.

Dans son avis sur les mesures notifiées, le comité scientifique, technique et économique de la pêche a estimé que les informations transmises par les autorités françaises, bien qu'insuffisantes, traduisaient un état de surexploitation sérieuse du stock de langoustes en Corse. Le CSTEP a également préconisé un renforcement des mesures prévues dans le cadre du régime transmis par les autorités françaises, et l'adoption d'actions complémentaires, afin de s'assurer d'une meilleure efficacité au niveau de la protection des ressources.

Par courrier en date du 9 janvier 2003, les autorités françaises se sont engagées à renforcer substantiellement les mesures mises en place en complément de l'arrêt temporaire d'activité, dans le sens des recommandations effectuées par le CSTEP (cf. point 2.2 de la présente décision).

Les objectifs précis et mesurables du plan, ainsi que l'échéancier et les effets des mesures qu'il contient, devraient ainsi être plus clairement identifiés. Sous ces conditions, il semble que la mesure notifiée puisse être qualifiée de «plan de protection des ressources aquatiques».

3.1.2.2. La notion de «mesures sociales d'accompagnement» correspond aux compensations financières liées aux pertes de revenus personnels des membres d'équipage concernés, consécutives à l'arrêt temporaire. Il s'agit par exemple de compensations à hauteur du salaire minimum ou des allocations de chômage qu'auraient dû toucher les personnes en question. Le cumul avec les prestations sociales existantes doit être strictement limité. Les lignes directrices précisent en effet que toute surcompensation doit être évitée.

En aucun cas, des pertes liées à l'activité économique du navire (chiffre d'affaires, bénéfices) ne peuvent être éligibles.

Dans le régime notifié, la compensation est calculée exclusivement en fonction de la valeur et la quantité des captures de langoustes débarquées lors du mois de septembre 2001, qui sert de chiffre d'affaires de référence. Le niveau de l'aide est ainsi fixé sur base de l'activité économique du navire, et non en fonction des revenus des membres d'équipage.

Afin de tenir compte du fait que les pêcheurs ont pu reporter leurs activités de pêche sur d'autres espèces que la langouste, une estimation de l'augmentation du chiffre d'affaires qui en a résulté a été soustraite au chiffre d'affaires de référence. Les pertes de recettes sont ainsi estimées à 5 037 EUR pour les chalutiers (dont la taille varie entre 12 et 25 mètres) et 5 154 EUR pour les autres navires («petits métiers», dont la taille varie entre 4 et 15 mètres). De manière à prendre en considération la différence entre les types de navires et ne procéder qu'à une compensation partielle des pertes de revenus, le montant versé au titre de ces compensations a été fixé à 3 526 EUR pour les chalutiers (au nombre de 12) et 4 639 EUR pour les autres navires (au nombre de 206).

Compte tenu de leur montant et de leur mode de calcul, ces aides, qui correspondent à 70 % des pertes de recettes des chalutiers et 90 % de celles des autres navires, ne paraissent pas pouvoir être qualifiées de «mesures sociales d'accompagnement», seules éligibles au titre du 2^e paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices et de l'article 12 (6).

3.1.2.3. La notion de «personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité» doit être considérée comme excluant en principe le propriétaire du navire, sauf lorsqu'il exerce l'essentiel de son activité professionnelle à bord de son navire.

La majorité des navires de pêche concernés par le régime notifié est constituée de navires de moins de 12 mètres, au sein desquels opère un seul pêcheur, qui est généralement également le propriétaire du navire. Pour ces pêcheurs, une compensation peut être versée au titre de l'article 12 (6), à condition que seules les mesures sociales d'accompagnement liées à leur activité en tant que membre d'équipage soient considérées, à l'exclusion de tout revenu lié à leur statut de propriétaires de navires.

Quelques chalutiers sont également concernés par le régime notifié. Il s'agit dans ce cas de navires de plus grande taille, comptant plusieurs marins à bord. Dans ces cas, le propriétaire de ces navires doit être exclu de toute indemnisation, à moins qu'il ne travaille à bord du navire (auquel cas il pourra prétendre à une compensation liée à son travail en tant que membre d'équipage uniquement).

Une distinction entre les membres d'équipage éligibles aux mesures d'aides et les autres pêcheurs n'a pas été opérée dans le régime analysé, si bien que les conditions posées par l'article 12 (6) ne semblent pas pleinement réunies sur ce point.

3.1.2.4. De ce fait, les aides versées pour l'année 2002 au titre du régime analysé ne paraissent pas se conformer aux dispositions du premier paragraphe du point 2.2.2. des lignes directrices.

3.2. *Aides dont le versement est prévu au cours de l'année 2003, et, si nécessaire, 2004*

Le régime d'aides prévoit que les aides dont l'objet est de compenser les pertes de recettes des pêcheurs suite à l'arrêt temporaire de la pêche à la langouste en septembre 2003 (et éventuellement 2004) seront accordées dans les mêmes conditions que les aides versées en 2002.

Les aides relatives à l'année 2003 (et éventuellement 2004) doivent être examinées en tenant compte du nouveau cadre réglementaire entré en vigueur le 1^{er} janvier 2003, et notamment des dispositions du règlement 2369/2002 modifiant le règlement 2792/1999. Les lignes directrices n'ayant pas fait l'objet de modifications, il convient néanmoins toujours de se référer à leur point 2.2.2 afin de procéder à l'analyse de la compatibilité des aides pour l'année 2003 (et éventuellement 2004).

3.2.1. Le premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices dispose que les aides à l'arrêt temporaire d'activités de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le droit communautaire si elles sont destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une mesure d'arrêt temporaire d'activité motivée par les circonstances visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999.

Le règlement (CE) n° 2792/1999 a été modifié par le règlement (CE) n° 2369/2002, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2003. En particulier, l'article 16 du règlement n° 2792/1999 relatif aux arrêts temporaires d'activité a été modifié par l'article 1 (13) du règlement 2369/2002. L'article 16 modifié ne prévoit plus la possibilité de compenser les pertes de revenus consécutives à la mise en place d'un «plan de rétablissement» par un État membre.

L'article 16 (1) (paragraphe a et c) du règlement n° 2792/1999, tel que modifié par le règlement 2369/2002, dispose que les pertes de revenus liées à un arrêt temporaire d'activité ne peuvent faire l'objet de compensations financières que dans les circonstances suivantes:

— en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques, ou

- en cas d'adoption par le Conseil d'un plan de reconstitution ou de gestion, ou
- en cas d'adoption de mesures d'urgence par la Commission ou un État membre.

Aucune de ces conditions n'est remplie par le régime notifié:

- L'arrêt temporaire prévu dans le régime notifié pour l'année 2003 n'est pas consécutif à un événement imprévisible, comme en témoigne notamment le fait qu'un arrêt temporaire a déjà été mis en place pour le même stock à la même période au cours de l'année 2002;
- Il n'existe pas à ce jour de plan de reconstitution ou de gestion adopté par le Conseil des Ministres concernant le stock de langoustes en Corse;
- Il n'existe pas de mesures d'urgence adoptées par la Commission pour ce stock; et l'arrêt temporaire notifié ne peut pas non plus être qualifié de mesure d'urgence adoptée par un État membre, telle que définie à l'article 8 du règlement 2371/2002 (notamment en l'absence de «menace imprévue» exigée pour le recours à cet article).

Compte tenu des éléments fournis par les autorités françaises, il ne semble pas que le versement des aides prévues au titre du régime analysée pour l'année 2003 (et, éventuellement, 2004) corresponde à l'un des cas prévus par l'article 16 du règlement n° 2792/1999. Il ne paraît donc pas se conformer aux dispositions du premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices.

3.2.2. L'analyse de la compatibilité avec le marché commun des aides prévues pour l'année 2003 (et, éventuellement, 2004) au regard du deuxième paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices est similaire à celle conduite pour les aides versées en 2002 (cf. point 3.1.2); en effet, l'article 12 (6) du règlement 2792/1999, auquel renvoie ce paragraphe, n'a été que légèrement modifié par le règlement 2369/2002.

Ainsi qu'il a été indiqué au point 3.1.2.1, il semble que les mesures mises en place en complément de l'arrêt d'activité peuvent être assimilées à un «plan de protection des ressources», compte tenu de l'engagement des autorités françaises à renforcer ces mesures conformément à l'avis du STECF.

Le niveau de l'indemnisation des bénéficiaires, ainsi que son mode de calcul, qui sont identiques pour 2002 et 2003, ne

semblent pas correspondre à la définition de «mesures sociales» au sens de l'article 12 (6) du règlement 2792/1999 (cf. point 3.1.2.2).

Enfin, le régime notifié n'opère pas de distinction entre la qualité des bénéficiaires de l'aide, selon qu'il s'agit de «personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité» ou non (cf. point 3.1.2.3). En particulier, l'article 12 (6) dispose désormais, suite à sa modification par le règlement 2369/2002, que seuls les «membres d'équipage» sont éligibles aux mesures sociales versées au titre de ce régime.

3.2.3. Compte tenu de ces éléments, les aides prévues pour l'année 2003 (et éventuellement 2004) au titre du régime analysé ne paraissent pas se conformer aux dispositions du deuxième paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices.

4. Décision

Par conséquent, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, des doutes sérieux quant à la compatibilité de ce régime d'aide avec les Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et, partant, avec le traité CE.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre. Elle demande aux autorités françaises de transmettre sans tarder une copie de la présente lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

Par la présente, la Commission avise les autorités françaises qu'elle informera les tiers intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au *Journal officiel de l'Union européenne*. Elle informera également les tiers intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois de la date de cette publication.»

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2003/C 202/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 12.6.2003

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Estado miembro: Irlanda

Ayuda: N 350/02

Denominación: Infraestructura de gestión de los residuos

Objetivo: Apoyar el desarrollo de técnicas integradas de gestión de los residuos y de las instalaciones de infraestructura

Fundamento jurídico: National Development Plan 2000 to 2006

Presupuesto: 127 millones de euros

Intensidad o importe de la ayuda: del 35 % al 50 %

Duración: 6 años

Otros datos: Informe anual

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 2.4.2003

Estado miembro: Alemania/Ciudad de Bremen

Ayuda: N 430/02

Denominación: Subvenciones para mejorar la imagen de la zona portuaria «Handelshafen»

Objetivo: Apoyar las inversiones de las PYME para la renovación de la zona portuaria

Fundamento jurídico: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Presupuesto: 500 000 euros por año

Intensidad o importe de la ayuda: Máximo 7,5 % -15 %

Duración: Hasta el 31.12.2004

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 23.6.2003

Estado miembro: Italia: región de Cerdeña

Ayuda: N 402/02

Denominación: Préstamos participativos a las PYME

Objetivo: Desarrollo regional

Fundamento jurídico: Progetto di deliberazione della Giunta regionale in ordine alla direttive di attuazione della misura 4.1 del POR Sardegna 2000-2006

Presupuesto: 11 152 000 de euros

Intensidad o importe de la ayuda:

i) ayudas a las inversiones: de acuerdo con el mapa italiano de ayudas con finalidad regional 2000-2006;

ii) ayudas a los servicios de consultoría: 50 % ESB

Duración: Limitada al 31.12.2006

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Fecha de adopción de la decisión: 27.5.2003

Estado miembro: Francia

Ayuda: N 63/03

Denominación: Ayuda a favor de la empresa Caillaud para el aprovechamiento energético de las harinas animales

Objetivo: Generación de energía mediante la combustión de residuos animales

Fundamento jurídico: Délibération du Conseil d'Administration de l'ADEME

Presupuesto:

Ayuda a la inversión: 6,99 millones de euros

Ayuda de funcionamiento: 3,62 millones de euros actualizada a lo largo de 5 años

Intensidad o importe de la ayuda: 40 % de los costes subvencionables para la ayuda a la inversión y 48,73 % de media para la ayuda de funcionamiento

Duración: 5 años

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid

Fecha de adopción de la decisión: 11.6.2003

Estado miembro: Suecia

Ayuda: N 726/02

Denominación: Producción de calor en centrales de producción combinada de calor y de electricidad (PCCE)

Objetivo: Reducción fiscal y exención del impuesto sueco sobre la energía y del impuesto sobre la emisión de CO₂ de los combustibles fósiles para instalaciones de producción combi-

nada de calor y poder (PCCE) que utilizan combustibles fósiles para producir calor para el sistema de calefacción urbana

Fundamento jurídico: Lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) 6a kap. 3 §, 9 kap. 5 och 9 §§ samt 11 kap. 10 §

Presupuesto: 640 millones de SEK (70 millones de euros)

Intensidad o importe de la ayuda: Entre 22 % y 24 % de la presión fiscal total (impuesto sobre la energía e impuesto sobre la emisión de CO₂ de los combustibles fósiles para calefacción, dependiendo del combustible)

Duración: 31.12.2005

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.3199 — Bank One Corporation/Quintiles)

(2003/C 202/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 20 de agosto de 2003 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en inglés y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, con el número de documento 303M3199. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información en la dirección siguiente:

EUR-OP

Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

Notificación previa de una operación de concentración
[asunto COMP/M.3232 — Trelleborg/Smiths (PSS Division)]

(2003/C 202/07)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 18 de agosto de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 ⁽²⁾, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Trelleborg AB («Trelleborg», Suecia) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento, del negocio de soluciones de sellado basado en polímeros (PSS) del grupo Smiths Group plc («Smiths PSS», Reino Unido) a través de adquisición de acciones y de activos.

2. Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

- Trelleborg: fabricación de sistemas anti-vibración para automóviles y aplicaciones industriales, productos y soluciones para la eliminación del ruido en vehículos, componentes para la refrigeración de automóviles y sistemas de ventilación, tracción y fluidos industriales, soluciones de ingeniería basadas en materiales polímeros, y productos basados en polímeros y betún resistentes al agua y para aplicaciones de sellado,
- Smiths PSS: fabricación de productos basados en polímeros para aplicaciones de sellado en la industria, incluyendo los sectores de automoción, petrolífero y gasístico, construcción, farmacéutico, químico, petroquímico, aeroespacial, marino, así como industrias papeleras.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto al proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.3232 — Trelleborg/Smiths (PSS Division), a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Operaciones de Concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

⁽²⁾ DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

Notificación previa de una operación de concentración**(asunto COMP/M.3200 — Toshiba/Mitsubishi Electric/JV)****Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado**

(2003/C 202/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 18 de agosto de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) nº 1310/97 ⁽²⁾, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas japonesas Toshiba Corporation («Toshiba») y Mitsubishi Electric Corporation («Mitsubishi Electric») adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento del Consejo, de Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation («JV»), mediante la adquisición de acciones en la empresa común de nueva creación.

2. Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

- Toshiba: fabricación integrada de una amplia gama de productos eléctricos y electrónicos,
- Mitsubishi Electric: fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos, de electrónica de consumo, de tecnología industrial, y de equipos con aplicaciones de energía, transporte e inmuebles,
- JV: sistemas eléctricos y automatizados para plantas de fabricación industrial.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo ⁽³⁾, se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.3200 — Toshiba/Mitsubishi Electric/JV, a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Operaciones de Concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

⁽²⁾ DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

⁽³⁾ DO C 217 de 29.7.2000, p. 32.

Comunicación de la Comisión ⁽¹⁾ de conformidad con la Directiva 73/23/CEE del Consejo, del 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, en su versión modificada por la Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾

(2003/C 202/09)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

De conformidad con la Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, en su versión modificada por la Directiva 93/68/CEE, la Comisión comunica la siguiente información:

LISTA DE ORGANISMOS NOTIFICADOS A LA COMISIÓN Y A LOS ESTADOS MIEMBROS CON ARREGLO AL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 11

REINO DE BÉLGICA

Artículo 5 y 8

AIB-Vincotte International
Elektrisch Proeflaboratorium/Laboratoire d'essais électriques
André Drouartlaan, 27-29/Avenue André Drouart 27-29
B-1160 Brussels

Alcatel Bell SA
Francis Wellesplein, 1
B-2018 Antwerpen

NVBB VZW — ANPI ASBL
Parc Scientifique
B-1348 Louvain-la-Neuve

CEBEC Registered Quality SCRL
Fr. Van Kalkenlaan 9A/Avenue F. Van Kalken 9A
B-1070 Brussels

ISSeP
Zetel van Colfontaine/Siège de Colfontaine
Rue Grande 60
B-7340 Pâturages

Proeflaboratorium voor de veiligheid van het elektrisch materieel/Laboratoire d'essais pour la sécurité du matériel électrique
Zennestraat, 17A/Rue de la Senne 17A
B-1000 Brussels

Laborelec
Centraal Laboratorium voor Elektriciteit (CIE)/
Laboratoire Central d'Electricité (LCE)
Rodestraat, 125/Rue de Rhode 125
B-1630 Linkebeek

REINO DE DINAMARCA

Artículo 8

UL International Demko A/S
Lyskær 8
Postboks 514
DK-2730 Herlev

Artículo 9

Elektricitetsrådet
Gothersgade 160
DK-1123 København K

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Artículos 8 y 9

TÜV Saarland e.V.
Am TÜV 1
D-66280 Sulzbach

RWTÜV Anlagentechnik GmbH
Kurfürstenstraße 58
D-45138 Essen

TÜV Nord e.V.
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
Große Bahnstraße 31
D-22525 Hamburg

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit — BIA
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Alte Heerstraße 111
D-53757 Sankt Augustin

Fachausschuss „Druck- und Papierverarbeitung“
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Rheinstraße 6—8
D-65185 Wiesbaden

Fachausschuss „Nahrungs- und Genussmittel“
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Dynamostraße 11
D-68165 Mannheim

TÜV Product Service GmbH
Ridlerstraße 31
D-80339 München

ITS Testing und Certification GmbH
Heilbronner Straße 5
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Landesgewerbeanstalt Bayern
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

⁽¹⁾ DO L 77 de 26.3.1973.

⁽²⁾ DO L 220 de 30.8.1993.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Fachausschuss „Elektrotechnik“
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Gustav-Heinemann-Ufer 130
D-50968 Köln

Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik (DPLF)
Weissensteinstraße 70/72
D-34131 Kassel

VDE-Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.
Merianstraße 28
D-63069 Offenbach

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Burgstädter Straße 20
D-09232 Hartmannsdorf

Electronic Technology Systems
Dr. Genz GmbH
Storkower Straße 38c
D-15526 Reichenwalde b. Berlin

NEMKO GmbH & Co. KG
Reetzstraße 58
D-76327 Pfinztal

KEMA — IEV
Ingenieurunternehmen für Energieversorgung GmbH
Gostritzer Straße 61—63
D-01217 Dresden

Fachausschüsse „Eisen und Metall III und Hebezeuge“
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Graf-Recke-Straße 69
D-40239 Düsseldorf

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH
Melchendorfer Straße 64
D-99096 Erfurt

EUROCAT GmbH Institute for Certification and Testing
Wittichstraße 2
D-64295 Darmstadt

REINO DE ESPAÑA

Artículos 8 y 9

Asociación Española de Normalización y Certificación
AENOR
C/ Génova 6
E-28004 Madrid

Laboratorio General de Ensayo e Investigación de la Generalitat
de Catalunya
LGAI

Ctra. Acceso Facultad de Medicina de la UAB
E-08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Centro de Investigación Tecnológica
Labein
Cuesta de Olaveaga, 16
E-48013 Bilbao

Laboratorio Central Oficial de Electrotécnica
LCOE
C/ José Gutiérrez Abascal, nº 2
E-28006 Madrid

Centro de Ensayos, Innovación y Servicios
CEIS
Ctra. de Villaviciosa de Odón a Móstoles km. 1,700
E-28935 Móstoles (Madrid)

REPÚBLICA HELÉNICA

Artículos 8 y 9

Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
Acharnon Street 313
GR-111 45 Athens

C3T SA
Kilkis Industrial Area
PO BOX 50
GR-611 00 Kilkis

Hellenic Electronic Equipment quality Assurance
Center (H.E.E.Q.A.C.) SA
6, Ierosolimou Str.
GR-112 52 Athens

Public Power Corporation
Testing, Research and Standards Center (TRSC/PPC)
9, Leontariou Str., Kanza
GR-153 44 Pallini Attikis

Labor SA
Ethnikis Antistaseos 84
GR-153 44 Pallini Attikis

REPÚBLICA DE FINLANDIA

Artículos 8 y 9

SGS Fimko Ltd
Särkiniementie 3, PO Box 30
FIN-00211 Helsinki

REPÚBLICA FRANCESA

Artículo 8

Laboratoire National d'Essais (LNE)
1, rue Gaston-Boissier
F-75724 Paris Cedex 15

Laboratoire Central des Industries Électriques (LCIE)
33, avenue du Général-Leclerc — BP 8
F-92266 Fontenay-aux-Roses Cedex

Emitech
3, rue des Coudriers
ZA de l'Observatoire
F-78180 Montigny-le-Bretonneux

Emitech Atlantique
15, rue de la Claie
ZI Angers-Beaucouzé
F-49070 Beaucouzé

ACTS
Les Peupliers
17, rue du Vertuquet
F-59960 Neuville en Ferrain

SMEE Actions Mesures
ZI des Blanchisseries
F-38500 Voiron

Artículo 9

Union Technique de l'Électricité (UTE)
33, avenue du Général-Leclerc — BP 23
F-92262 Fontenay-aux-Roses Cedex

IRLANDA

Artículos 8 y 9

Enterprise Ireland
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

REPÚBLICA ITALIANA

Artículos 8 y 9

Istituto elettrotecnico nazionale
Galileo Ferraris — IENGF
Corso Massimo d'Azeglio, 42
I-10125 Torino

Centro elettrotecnico sperimentale italiano
G. Motta SpA — CESI
Via Rubattino, 54
I-20134 Milano

Istituto italiano del marchio di qualità IMQ SpA
Via Quintiliano, 43
I-20138 Milano

Artículo 8

Agenzia per l'alta tecnologia SpA — CESVIT
Via Pian dei Carpini, 28
I-50127 Firenze

Istituto italiano della saldatura — IIS
Lungobisagno Istria, 15
I-16141 Genova

Tecnos Srl
Via Monte Pelmo, 8
I-33170 Pordenone

Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini Srl
Via Moscova, 11
I-20017 Rho (Milano)

Italcert
Viale Sarca, 336
I-20126 Milano

Istituto Ricerche Prove ed Analisi Srl — CPM
Via Artigiani, 63
I-25040 Bienna (BS)

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

Artículos 8 y 9

Société Nationale de Certification et d'Homologation
Sàrl (SNCH)
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

REINO DE LOS PAÍSES BAJOS

Artículos 8 y 9

KEMA Quality BV
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
(Postbus 9035 — 6800 ET Arnhem)
Nederland

TNO E.P.S.
Smidshornweg 18
Postbus 15
9822 ZG Niekerk
Nederland

Gastec NV
Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
Nederland

REINO DE NORUEGA

Artículos 8 y 9

Det Norske Veritas A/S
Prøvelaboratoriet, Divisjon Norden
Veritasveien 1
PO Box 300
N-1322 Høvik

Nemko AS
Gaustadalleen 30
Postboks 73 Blindern
N-0314 Oslo

REPÚBLICA DE AUSTRIA

Artículos 8 y 9

Österreichischen Verband für Elektrotechnik (ÖVE)
Prüfwesen und Zertifizierung
Kahlenbergerstraße 2b/2/1
A-1190 Wien

Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal GmbH
— (ÖFPZ-Arsenal)
Faradaygasse 3
A-1030 Wien

TGM Versuchsanstalt für Elektrotechnik (TGM-VA/E)
Wexstraße 19-23
A-1200 Wien

Gesellschaft zur Prüfung elektrotechnischer
Industrieprodukte GmbH
CTI — Cooperative Testing Institute
Einzingergasse 4
A-1210 Wien

Technischer Überwachungs-Verein Österreich
TÜV A
Krugerstraße 16
A-1015 Wien

REPÚBLICA PORTUGUESA

Artículos 8 y 9

Instituto Electrotécnico Português (IEP)
Rua de S. Gens, n.º 3717
P-4450 Matosinhos

CATIM — Centro de Apoio Tecnológico à Industria
Metalomecânica
Rua dos Plátanos, 197
P-4100 Porto

Artículo 8

Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)
EN 249 — Km 3, Cabanas — Leão
(Taguspark), apartado 119
P-2781 Oeiras Codex

Laboratório Industrial da Qualidade (LIQ)
Apartado 228
P-3751 Águeda Codex

REINO DE SUECIA

Artículos 8 y 9

SEMKO AB
Torshamnsgatan 43
Box 1103
S-164 22 Kista

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Artículos 8 y 9

AMTAC Laboratories Ltd
Norman Road
Broadheath
Altrincham
Cheshire WA14 4EP
United Kingdom

Nemko Limited
15 Chelsea Fields Estate
Western Road
London SW19 2QA
United Kingdom

ITS Testing and Certification Ltd
ITS House
Cleeve Road
Leatherhead
Surrey KT22 7SB
United Kingdom

TUV Product Service Limited
Segensworth Road
Fareham
Hampshire PO15 5RH
United Kingdom

KTL
Saxon Way
Priory Park West
Hull HU13 9PB
United Kingdom

SGS United Kingdom Ltd
South Industrial Estate
Bowburn
Durham DH6 5AD
United Kingdom

ASTA Certification Services
ASTA House
Chestnut Field
Rugby
Warwickshire CV21 2TL
United Kingdom

British Approvals Board for Telecommunications (BABT)
Claremont House
34 Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RQ
United Kingdom

British Approvals Service for Cables (BASEC)
23 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes MK8 0ES
United Kingdom

British Electrotechnical Approvals Board (BEAB)
1 Station View
Guildford
Surrey GU1 4JY
United Kingdom

BSI Product Services
Maylands Avenue
Hemel Hempstead
Herts HP2 4SQ
United Kingdom

Specialised Technology Resources (UK) Ltd
10 Portman Road
Reading
Berkshire RG30 1EA
United Kingdom

TRL Compliance Services Ltd
Safety Division
Moss View
Nipe Lane, Up Holland
West Lancashire WN8 9PY
United Kingdom

Technology International (Europe) Ltd
41-42 Shrivenham Hundred Business Park
Shrivenham
Swindon
Wiltshire SN6 8TZ
United Kingdom

Celestica Limited
Westfields House, West Avenue
Kidsgrove
Stock-on-Trent
Staffordshire ST7 1TL
United Kingdom

The Lighting Association
Stafford Park 7
Telford
Shropshire TF3 3BQ
United Kingdom

UL International (UK) Ltd
Wonersh House (Building C)
The Guildway
Old Portsmouth Road
Guildford
Surrey GU3 1LR
United Kingdom

CCQS (UK) Ltd
18 Creffield Road
London W5 3RD
United Kingdom

Aviso: Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

BANCO CENTRAL EUROPEO

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 15 de agosto de 2003

solicitado por el Consejo de la Unión Europea, sobre una propuesta de decisión del Consejo relativa al análisis y la cooperación en relación con las monedas de euro falsificadas [COM(2003) 426 final]

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. El 30 de julio de 2003 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen sobre una propuesta de decisión del Consejo relativa al análisis y la cooperación en relación con las monedas de euro falsificadas [COM(2003) 426 final] (en adelante, «la propuesta de decisión»).
2. La competencia consultiva del BCE se basa en el primer guión del apartado 4 del artículo 105 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el primer guión de la letra a) del artículo 4 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ya que la propuesta de decisión incluye disposiciones que afectan a la cooperación en relación con las monedas de euro falsificadas. De conformidad con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del BCE, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno del BCE.
3. El objetivo principal de la propuesta de decisión es garantizar la continuidad y la independencia en la protección de las monedas de euro contra la falsificación, lo cual se logrará atribuyendo a la Comisión la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del Centro Técnico y Científico Europeo (el «CTCE») y la coordinación de las actividades de las autoridades técnicas competentes de los Estados miembros para proteger las monedas de euro contra la falsificación. El Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación ⁽¹⁾, complementado por el Reglamento (CE) n° 1339/2001 del Consejo de 28 de junio de 2001 ⁽²⁾ (en lo sucesivo, el «Reglamento del Consejo»), dispone en el apartado 2 de su artículo 5 que los centros nacionales de análisis de monedas de los Estados miembros y el CTCE analicen y clasifiquen las monedas de euro falsificadas. El CTCE desempeña sus funciones provisionalmente en la Casa de la Moneda francesa con el apoyo administrativo y la gestión suministrados por la Comisión, tal y como se estableció por canje de notas entre el Presidente del Consejo y el Ministro de Hacienda francés el 28 de febrero y el 9 de junio de 2000. Según el informe de evaluación elaborado bajo la responsabilidad de los Directores de las Casas de la Moneda de la UE, la labor del CTCE es satisfactoria. La conclusión del informe fue que el lugar en el que el CTCE llevaba a cabo sus actividades era apropiado y que la Comisión facilitaba el marco administrativo e institucional adecuado en términos de eficacia e independencia.
4. El BCE comparte la opinión favorable de los Directores de las Casas de la Moneda de la UE sobre la labor realizada hasta el momento por el CTCE. También está de acuerdo en que la necesidad de continuidad e independencia en la protección de las monedas de euro contra la falsificación requiere una decisión definitiva por lo que se refiere a la ubicación del CTCE. En consecuencia, el BCE celebra y apoya en general la decisión propuesta de que la Comisión garantice el funcionamiento del CTCE y la coordinación de las actividades técnicas de los Estados miembros para proteger las monedas de euro contra la falsificación. En este punto, el BCE advierte que la expresión «autoridades técnicas competentes» empleada en el artículo único de la propuesta de decisión no resulta clara. El BCE recomienda sustituirla por la expresión «autoridades nacionales competentes», que se define en la letra b) del artículo 2 del Reglamento del Consejo.
5. El BCE observa que, en su apartado 4, el artículo 5 del Reglamento del Consejo dispone además que el CTCE comunique los resultados finales de sus análisis de las monedas de euro falsas a, entre otros, la Comisión y el BCE, en función de sus respectivas responsabilidades. A su vez, el CTCE tendrá acceso a los datos técnicos y estadísticos que almacene el BCE sobre las monedas de euro falsas. El BCE subraya que, en cooperación con la Comisión y el CTCE, le corresponde adoptar las medidas pertinentes para poner en práctica el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento del Consejo.

⁽¹⁾ DO L 181 de 4.7.2001, p. 6.

⁽²⁾ DO L 181 de 4.7.2001, p. 11.

6. Por último, el BCE observa que la Comisión se propone adoptar una posterior decisión de desarrollo de la responsabilidad que se le atribuye en la propuesta de decisión. El BCE emitirá dictamen sobre esa decisión cuando la Comisión le consulte.

7. El presente dictamen se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 15 de agosto de 2003.

*Miembro del Comité Ejecutivo
del BCE*

Tommaso PADOA-SCHIOPPA

*Miembro del Comité Ejecutivo
del BCE*

Gertrude TUMPEL-GUGERELL

III

(Informaciones)

COMISIÓN

Adenda a la convocatoria 2003-2004 en el marco de la segunda fase del programa Leonardo da Vinci (EAC/15/02)

(2003/C 202/11)

Después de la publicación de la convocatoria de propuestas 2003-2004 en el marco de la segunda fase del programa Leonardo da Vinci (EAC/15/02) ⁽¹⁾, el Consejo adoptó el 25 de junio de 2002 el Reglamento (CE) n° 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. Por otra parte, también adoptó, el 19 de diciembre de 2002, una Resolución relativa al fomento de la cooperación reforzada europea en materia de educación y formación profesionales ⁽²⁾.

Para tener en cuenta estas medidas, la convocatoria de propuestas 2003-2004 en el marco de la segunda fase del programa Leonardo da Vinci (EAC/15/02) ⁽³⁾ queda modificada como sigue:

1. En el capítulo II se añade el apartado siguiente:

«La Comisión insta a los promotores a prestar atención a la **Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa al fomento de la cooperación reforzada europea en materia de educación y formación profesionales** ⁽⁴⁾, y a las prioridades en ella mencionadas que resultan particularmente pertinentes para el programa Leonardo da Vinci.»

2. El capítulo XII queda derogado y se sustituye por las disposiciones siguientes:

«XII. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

1. Participación en el programa

De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 1999/382/CE del Consejo por la que se establece la segunda fase del programa Leonardo da Vinci ⁽⁵⁾, «podrán acceder al programa todos los organismos e instituciones públicos y privados que participan en las acciones de formación profesional, y en particular:

a) los centros y organismos de formación profesional a todos los niveles, incluidas las universidades;

b) los centros y organismos de investigación;

c) las empresas ⁽⁶⁾, en particular las pequeñas y medianas empresas y el sector artesanal, o los establecimientos del sector público o privado, sin excluir los que son activos en el ámbito de la formación profesional;

d) las organizaciones profesionales, incluidas las cámaras de comercio, etc.;

e) los interlocutores sociales;

f) las entidades y organismos locales y regionales;

g) las organizaciones sin fines lucrativos, las organizaciones de voluntariado y las organizaciones no gubernamentales (ONG).»

Estos organismos e instituciones deberán estar establecidos en uno de los países participantes en el programa Leonardo da Vinci. Antes de asignar los subsidios a los proyectos seleccionados, la agencia nacional o la Comisión ⁽⁷⁾ solicitarán la confirmación del estatuto jurídico de la organización promotora.

2. Procedimientos de selección y de concesión de las subvenciones

Las propuestas presentadas se evaluarán y las subvenciones se concederán según tres tipos de procedimientos –denominados A, B y C– en función de las medidas de que se trate. Estos procedimientos se describen en la Decisión del Consejo por la que se establece la segunda fase del programa ⁽⁸⁾ y en el **capítulo VII** de la Guía general del promotor. A los promotores de las propuestas seleccionadas se les informará por escrito de los resultados de esos procedimientos y se les podrá proponer un contrato con la agencia nacional o con la Comisión, dependiendo del procedimiento aplicable.

⁽¹⁾ DO C 117 de 18.5.2002, p. 10.

⁽²⁾ DO C 13 de 18.1.2003, p. 2.

⁽³⁾ DO C 117 de 18.5.2002, p. 10.

⁽⁴⁾ DO C 13 de 18.1.2003, p. 2.

⁽⁵⁾ Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).

⁽⁶⁾ Es decir, «toda empresa del sector público o privado, cualesquiera que sean su tamaño, su régimen jurídico o el sector económico en que ejerza su actividad y todos los tipos de actividad económica, incluida la economía social» (véase el anexo III de la Decisión 1999/382/CE, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci).

⁽⁷⁾ Sólo en relación con el procedimiento C.

⁽⁸⁾ Sección III del anexo I de la Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).

Por lo que respecta a las fechas más probables para el cierre del procedimiento:

- Para el procedimiento A, las Agencias nacionales informarán a los promotores de la selección o no selección de su proyecto aproximadamente tres meses después de la fecha de presentación de las propuestas;
- Para el procedimiento B, dichas fechas se indican en el capítulo X de la convocatoria de propuestas 2003-2004.

La fecha probable de clausura de los procedimientos se indica en el capítulo X de la convocatoria de propuestas 2003-2004.

La fecha en la que podrán comenzar los proyectos seleccionados será:

- para los proyectos del procedimiento A: el 1 de junio de 2004;
- para los proyectos de los procedimientos B y C: el 1 de septiembre de 2004.

3. Principios de concesión de las subvenciones

Las subvenciones concedidas en el marco de la presente convocatoria de propuestas y de las posibles convocatorias nacionales según el procedimiento A estarán sujetas a lo dispuesto en el título VI "De las subvenciones" del nuevo Reglamento financiero de las Comunidades Europeas ⁽⁹⁾. De acuerdo con ese título, la concesión de subvenciones estará sometida a los principios siguientes:

- Se basará en la transparencia y la igualdad de trato entre propuestas y promotores.
- Las subvenciones deberán implicar una cofinanciación (salvo en el caso de los proyectos con arreglo al procedimiento A).
- Por una misma propuesta sólo podrá concederse una única subvención comunitaria en favor de un mismo promotor. Por consiguiente, **los promotores de propuestas o socios no podrán solicitar más de una vez ayuda financiera de Leonardo da Vinci para la misma propuesta durante el mismo año de selección, cualesquiera que sean el procedimiento y el organismo ⁽¹⁰⁾ al que se presente la propuesta. El mismo proyecto no podrá ser financiado más de una vez por el programa Leonardo da Vinci.**
- No podrá concederse subvención a acciones ya emprendidas, salvo en los casos excepcionales en que el solici-

tante pueda demostrar que era necesario comenzar la acción antes de la firma del convenio. En tal caso, los gastos con posibilidad de optar a una financiación no podrán ser anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de subvención. No podrán concederse, en ningún caso, ayudas con carácter retroactivo para operaciones que ya hayan finalizado.

- La subvención no podrá tener por objeto o efecto producir beneficio alguno durante el período cubierto por el convenio. Sin embargo, esta disposición no se aplica a las becas abonadas a personas físicas. Tratándose de proyectos conforme a los procedimientos B y C y en caso de comercialización de los productos desarrollados en el marco del proyecto, los ingresos devengados por dicha comercialización durante el período del convenio deberán declararse en los informes que se presenten a la agencia nacional o a la Comisión, según el procedimiento. Todo ingreso generado por el proyecto y percibido por la asociación en la fecha de presentación de la demanda de pago final limitará la participación financiera del programa Leonardo da Vinci al importe necesario para equilibrar los gastos e ingresos.

4. Presentación de las propuestas

Los promotores enviarán sus propuestas en papel, debidamente firmadas por su representante legal. Para evaluar la admisibilidad de las propuestas, **sólo se tendrá en cuenta la versión en papel.**

Se ruega a los promotores que envíen una versión electrónica en línea, con objeto de permitir la reutilización posterior de los datos y de facilitar su manejo por las agencias nacionales y por la Comisión. Se cumplimentará en línea en la dirección siguiente:

<http://leonardo.cec.eu.int>

Para cualquier pregunta relativa a la presentación electrónica, diríjase a:

leonardo-helpdesk@cec.eu.int o
leonardo-helpdesk@socleoyouth.be

De todas formas, en los casos en los que el promotor no haya cumplimentado en línea su propuesta, se recomienda el envío a la Agencia nacional o a la Comisión, mediante correo electrónico, del fichero Word de su propuesta, respetando las fechas que figuran en el capítulo X de la convocatoria de propuestas 2003-2004. Este envío mediante correo electrónico se acompañará de una declaración en la que el promotor certificará que dicha versión Word de la propuesta anexa al mensaje es idéntica a la versión en papel enviada por correo.

En función de las medidas de que se trate, las propuestas (en papel) deberán enviarse a las agencias nacionales responsables, a la Comisión Europea o a ambas, conforme a las indicaciones del siguiente cuadro:

⁽⁹⁾ Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, publicado en el Diario Oficial L 248 de 16.9.2002 (puede consultarse en todas las lenguas en la siguiente dirección Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex>).

⁽¹⁰⁾ Comisión o agencias nacionales.

Procedimiento	Tipo de propuesta	Enviar a:
Procedimiento A	Todo tipo de propuestas	Agencia nacional responsable (original y 2 copias)
Procedimiento B	Proyectos de propuestas	Agencia nacional responsable (original y 2 copias)
	Propuestas completas	Agencia nacional responsable (original y 2 copias) y Comisión Europea (2 copias)
Procedimiento C	Proyectos de propuestas	Comisión Europea (original y 2 copias)
	Propuestas completas	Comisión Europea (original y 2 copias) y Agencia nacional responsable (2 copias)

Deberán utilizarse las siguientes direcciones:

Agencias nacionales: las direcciones (postales y electrónicas) pueden obtenerse en:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_fr.html

Comisión Europea: utilícese exclusivamente la siguiente dirección postal:

Oficina de asistencia técnica de Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud
Departamento Leonardo da Vinci
Convocatoria de propuestas 2003-2004
Procedimiento C o Procedimiento B **según proceda**
59-61, rue de Trèves
B-1040 Bruselas

Para el envío por correo electrónico a la Comisión, utilícese exclusivamente la siguiente dirección:

leonardo-helpdesk@socleoyouth.be

No olvide que, sea cual sea el procedimiento, los proyectos de propuestas y las propuestas completas que se remitan a una dirección incorrecta se considerarán automáticamente inadmisibles y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta en la fase de evaluación.

5. Evaluación de las propuestas

Los proyectos de propuestas se evaluarán con arreglo a criterios de admisibilidad y a criterios de adjudicación. Las propuestas completas y las propuestas del procedimiento A se evaluarán con arreglo a criterios de admisibilidad, criterios de selección y criterios de adjudicación.

— Los criterios de admisibilidad se enuncian en el **capítulo VI.1** de la Guía general del promotor (y figuran en el anexo II del formulario de candidatura). Sólo serán evaluadas las propuestas que cumplan todos estos criterios.

— Los criterios de selección permitirán evaluar la capacidad financiera y operativa del solicitante para llevar a cabo la acción o el programa de trabajo propuestos. Estos criterios se enuncian en el **capítulo VI.2** de la Guía general del promotor.

— Los criterios de adjudicación permitirán evaluar la calidad de las candidaturas en función de los objetivos y prioridades del programa. Estos criterios se enuncian en el **capítulo VI.3** de la Guía general del promotor.

La Guía general del promotor indica asimismo los justificantes que, en su caso, deberán adjuntarse a las propuestas.

En caso de declaración falsa relativa a la admisibilidad de la propuesta, podrá aplicarse al promotor una penalización financiera (proporcional al valor de la subvención solicitada), así como sanciones administrativas.

6. Publicación de los resultados de los procedimientos

Todas las subvenciones concedidas durante un ejercicio financiero (con excepción de las becas abonadas a personas físicas) serán publicadas en el sitio Internet de la Comisión (procedimiento C) o de la agencia nacional responsable (procedimientos A y B), en los seis meses siguientes al cierre del procedimiento de adjudicación. El sitio Internet de la Comisión ofrecerá vínculos con los sitios Internet de las agencias nacionales.

En la publicación figurarán el nombre y domicilio del promotor, el objeto de la subvención, el importe concedido y el porcentaje de cofinanciación comunitaria (salvo en el caso de los proyectos del procedimiento A).

7. Disposiciones comunitarias de financiación

Los datos sobre duración e importe máximo de la subvención comunitaria con arreglo a lo establecido por la Decisión del Consejo por la que se establece la segunda fase del programa Leonardo da Vinci figuran en la Guía general del promotor (**capítulo III**) y en las guías específicas de cada medida.

En el "Manual administrativo y financiero", disponible en la dirección Internet que se indica en el punto 8, se ofrece información más detallada sobre las cuestiones financieras y presupuestarias.

8. Documentación

La Guía general del promotor, las guías específicas para cada medida, el Manual administrativo y financiero para los proyectos de los procedimientos B y C y los formularios de candidatura que deberán cumplimentarse pueden obtenerse en la dirección siguiente:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_fr.html

También los puede solicitar en:

— Las agencias nacionales:

en el punto XI de la convocatoria de propuestas 2003-2004 encontrará la referencia a sus direcciones.

— La oficina de asistencia técnica:

Oficina de asistencia técnica de Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud
Departamento Leonardo da Vinci
59-61, rue de Trèves
B-1040 Bruselas
Fax (32-2) 233 01 50
Dirección electrónica: leonardo@socleoyouth.be

— Comisión Europea

Fax (32-2) 295 57 04
Dirección electrónica: leonardo-helpdesk@cec.eu.int

El Manual administrativo y financiero para los proyectos del procedimiento A puede obtenerse en las agencias nacionales responsables.

NOTA: La Guía general del promotor, los formularios de candidatura y el Manual administrativo y financiero han sido revisados para tener en cuenta el presente adenda. Por lo tanto, para el ejercicio de selección de 2004 habrán de utilizarse los documentos actualizados (versión 2004).

TRIBUNAL DE CUENTAS

LISTA DE APTITUD

OPOSICIÓN GENERAL CC/A/12/02

Constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (carrera A 7/A 6) en el ámbito de la informática

(2003/C 202/12)

La lista de aptitud es la siguiente:

ALEXANDRE Frédéric
ANGELOUSSIS Dimos
ARAQUE GARCÍA Manuel
BLAS ANGLADA Carles
BOVALIS Konstantinos
CHATZIS Konstantinos
CORDERO VALDAVIDA Magdalena
COURTEL Thierry
DE SMEDT Patrick
DELWICHE Siegfried
DRYLLERAKIS Konstantinos
FOCCROULLE Jean
FOREST Laurent
FRESNENA PEREZ Raul
GEVAERT Hans
HOUZIAUX Roland
